

INFORME ESPECIAL · HECHOS EN CRUDO

LA DISOLUCIÓN DEL REINO UNIDO: EL REINO QUE EMPEZÓ A DISCUTIR SU FINAL

Escocia, Gales e Irlanda del Norte coordinan sus reclamos mientras Londres conserva la llave legal, la libra, la deuda y el arsenal nuclear

Cardiff puso a la unión contra el calendario, pero todavía no abrió las urnas



El 14 de septiembre de 2026, cuatro dirigentes se sentaron en Cardiff ante una frase diseñada para atravesar siglos: “el tiempo de Westminster está llegando a su fin”. John Swinney, líder del Partido Nacional Escocés y primer ministro de Escocia; Rhun ap Iorwerth, jefe de Plaid Cymru y primer ministro de Gales; Michelle O’Neill, vicepresidenta de Sinn Féin y primera ministra de Irlanda del Norte; y Mary Lou McDonald, presidenta del partido republicano irlandés, ***firieron un memorando de cooperación. El documento pide al Gobierno británico que prepare, planifique y facilite el cambio constitucional. Por primera vez desde que comenzó la devolución moderna, las tres primeras jefaturas autonómicas están ocupadas por dirigentes que favorecen abandonar el Reino Unido o, en el caso norirlandés, reunificar la isla.***

La escena tuvo fuerza histórica y una precisión jurídica menos espectacular. ***No fue una declaración de independencia, no fijó fechas y no transfirió competencias.*** El memorando se firmó entre partidos nacionalistas, no como tratado vinculante de los tres gobiernos autónomos. En Belfast, O’Neill comparte poder con la viceprimera ministra unionista Emma Little-Pengelly y no puede comprometer por sí sola al Ejecutivo. En Cardiff, Plaid Cymru gobierna por primera vez, pero no anunció una consulta inmediata. En Edimburgo, el SNP volvió a ser la primera fuerza con 57 de los 129 escaños: suficiente para gobernar y sostener el reclamo, insuficiente para presentar la cámara como unánime.

Londres respondió con continuidad. Andy Burnham, primer ministro desde julio, ***mantiene fuera de agenda un nuevo referéndum escocés mientras no exista un cambio claro y sostenido de opinión.*** Su gobierno se presenta como ***defensor de una unión capaz de reformarse y ofrecer resultados.*** La tensión no se reduce a un sí o un no: si Westminster puede decidir indefinidamente cuándo una nación tiene derecho a preguntar, el procedimiento puede parecer veto; si una mayoría de



escaños autonómicos basta para declarar un mandato, una elección sobre salud, vivienda y salarios puede convertirse después en plebiscito retroactivo.

Escocia es el frente más avanzado. El 28 de agosto, su gobierno publicó un proyecto de ley con la misma pregunta de 2014: “¿Debería Escocia ser un país independiente?”. Incluye franquicia y reglas, pero carece de la competencia necesaria para entrar en vigor sin acuerdo británico. ***La Corte Suprema estableció en 2022 que incluso una consulta presentada como no vinculante afecta la unión y queda fuera de las facultades de Holyrood.*** La sentencia cerró la vía unilateral bajo el marco actual; no borró la disputa democrática sobre si Londres debe volver a conceder una transferencia temporal como la de 2012.

Gales llega por otra ruta. La identidad nacional y la lengua tienen una base social mucho más amplia que el apoyo a la separación. El gobierno de Plaid Cymru puede utilizar la gestión para construir capacidad, reclamar el poder de consulta y convertir una opción minoritaria en una alternativa evaluable. También puede fracasar si los servicios públicos deteriorados hacen que la cuestión constitucional parezca evasión. Una frontera galesa no sería una línea abstracta: cortaría rutas ferroviarias que entran y salen de Inglaterra, cadenas manufactureras, hospitales compartidos y movimientos laborales cotidianos.

Irlanda del Norte posee la única puerta escrita de antemano. El Acuerdo de Belfast y la legislación británica disponen que el secretario de Estado convoque una consulta cuando le parezca probable una mayoría por la reunificación. Esa regla no identifica una encuesta automática ni convierte en “religión” el voto. Northern Ireland Life and Times registró en 2025 un ***36 por ciento por la unidad, 45 por ciento por permanecer y 9 por ciento indeciso.*** La unidad es una opción real y legal; bajo esa medición todavía no era mayoritaria. Si un día vence, el cambio requerirá también consentimiento en la República de Irlanda y una integración de impuestos, salud, pensiones, ciudadanía y símbolos.

La noticia adquiere escala porque el Reino Unido no es un Estado reciente que aún busca forma. Es una continuidad institucional construida por capas: Gales incorporado al reino inglés; coronas compartidas desde 1603; parlamentos de Inglaterra y Escocia unidos desde 1707; unión con Irlanda en 1801; partición de la isla y salida del Estado Libre Irlandés en 1922; devolución desde 1998. Su antigüedad no proviene de haber permanecido idéntico, sino de haber cambiado sin sustituir por completo la Corona, Westminster y la tradición constitucional. La pregunta de 2026 es si esa elasticidad vuelve a funcionar o si las adaptaciones crearon gobiernos capaces de imaginarse fuera.



El Brexit convirtió una controversia histórica en un problema de fronteras contemporáneas. Escocia e Irlanda del Norte votaron por permanecer en la Unión Europea; Inglaterra y Gales, por salir. Desde entonces, Escocia puede presentar la independencia como regreso a Europa y el nacionalismo irlandés como restauración de una isla dentro de un mismo mercado. Pero la geografía impone una factura inversa:

el principal mercado escocés y galés es el resto del Reino Unido. Ingresar en la UE aliviaría una frontera y endurecerá otra, salvo que Londres y Bruselas reduzcan su propia distancia.

En la costa occidental escocesa, la disputa contiene además cuatro submarinos, misiles Trident y dos instalaciones que no tienen reemplazo listo. Faslane aloja la fuerza submarina; Coulport almacena y manipula las cabezas. El Gobierno escocés promete retirarlas de manera segura y rápida. Londres acaba de comprometer £15.100 millones para modernizar Clyde durante diez años y más de 6.500 empleos dependen de la base. ***Los cálculos históricos para trasladar el sistema a Inglaterra van desde varios miles de millones hasta decenas de miles de millones, con plazos de una o dos décadas y sin presupuesto oficial.*** Escocia no controlaría las armas: controlaría el terreno y el tiempo que Londres necesita.



La Corona tampoco ofrece una respuesta automática. Una Escocia independiente podría conservar a Carlos III como rey bajo una Corona jurídicamente escocesa, del mismo modo en que Canadá o Australia comparten a la persona del monarca sin compartir gobierno. Gales podría elegir monarquía o república; una Irlanda unida permanecería bajo la presidencia irlandesa salvo reforma. El fin territorial de la unión no es sinónimo necesario del fin de la monarquía. Sí obligaría a decidir quién aconseja al rey, qué título usa, qué Estado continúa los tratados y cómo se llama aquello que quede.

Esta investigación parte de esa noticia y desmonta sus atajos. Examina qué está vigente, quién puede convocar cada votación, qué sostienen los sondeos, cómo se repartirían deuda y pensiones, qué fronteras aparecerían, qué pasaría con la libra, la UE, la OTAN, los servicios, las migraciones, los territorios de ultramar y la Commonwealth. También distingue costos observados de modelos, y planes oficiales de acuerdos efectivos. El Reino Unido puede conservarse, reformarse, perder una nación o atravesar una secuencia de separaciones. ***Ninguno de esos futuros está decidido por una fotografía en Cardiff.***

Aclaración editorial

Al 21 de septiembre de 2026 (día de publicación) no hay referéndums de independencia convocados en Escocia o Gales ni una border poll fijada para Irlanda del Norte. Existe un proyecto escocés sin competencia habilitante, un memorando político entre SNP, Plaid Cymru y Sinn Féin y un rechazo del Gobierno británico. La disolución del Reino Unido es un escenario de investigación: posible, condicionado y no una realidad objetiva consumada.

TRABAJO METODOLÓGICO ¿CÓMO LEER ESTE INFORME?

1. Método, alcance y reglas de imparcialidad

Esta segunda parte amplía la síntesis inicial y trata la eventual descomposición del Reino Unido como un conjunto de procesos, no como una fecha única. El horizonte de observación es 2026–2040. Se distinguen cuatro clases de evidencia: normas vigentes; decisiones y posiciones oficiales; estadísticas con metodología publicada; y escenarios elaborados por instituciones académicas, parlamentarias o centros especializados. Una promesa partidaria no se presenta como política acordada; una estimación histórica no se actualiza como si fuera un presupuesto; una encuesta no se convierte en pronóstico electoral. Esa disciplina resulta crucial porque casi todos los números centrales cambiarían después de una separación.

El cuerpo principal se organiza por unidades de decisión. Inglaterra tendría que redefinir el Estado continuador; Escocia debe resolver la tensión entre su principal mercado y su proyecto europeo; Gales necesita demostrar capacidad fiscal y administrativa además de identidad nacional; Irlanda del Norte dispone de una vía legal singular, pero cualquier mayoría tendría que integrarse con la República de Irlanda sin deshacer el acuerdo de paz. La República es por ello un quinto actor indispensable. También intervienen la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, los territorios de ultramar, las dependencias de la Corona y los otros reinos de Carlos III.

Las cifras fiscales se leen como fotografía del arreglo vigente. GERS atribuye ingresos y gastos a Escocia dentro del Reino Unido; la Comisión Constitucional de Gales discute estimaciones construidas con métodos semejantes; el Consejo Fiscal de Irlanda del Norte examina su financiación y sostenibilidad. Ninguno calcula por sí solo el presupuesto exacto del día uno de un Estado nuevo. Después de la independencia cambiarían los intereses, la defensa, la administración, la recaudación, la distribución territorial de empresas

y el crecimiento. Por eso se ofrecen rangos, mecanismos de transmisión y variables sensibles, antes que un saldo pretendidamente definitivo.

Las estadísticas comerciales tampoco son idénticas. Export Statistics Scotland estima exportaciones; Trade Survey for Wales releva ventas y compras empresariales; NISRA publica ventas por destino y comercio exterior. Se utilizan para medir dependencia relativa, sin combinar sus magnitudes como si provinieran de una sola contabilidad. La regla de lectura es sencilla: cuanto mayor es el vínculo con el mercado que quedaría al otro lado de una frontera regulatoria, mayor es la necesidad de un acuerdo profundo o de asumir costos de fricción.

En demografía se utilizan las proyecciones nacionales 2024-based de la ONS y los censos territoriales. Una proyección no predice: aplica supuestos de fecundidad, mortalidad y migración. Su valor para este informe es mostrar la presión común del envejecimiento y la distinta dependencia de la inmigración. La política constitucional se cruza así con una cuestión material: quién sostendrá la fuerza de trabajo, las pensiones, la salud y los cuidados en cada territorio durante las décadas en que se negociaría la separación.

Tipo de afirmación	Prueba exigida	Límite de interpretación
Hecho vigente	Ley, sentencia, estadística o comunicación oficial	Puede cambiar después de la fecha de corte
Preferencia social	Encuesta representativa con pregunta y fecha	No equivale a resultado futuro ni mandato jurídico
Costo de transición	Presupuesto o modelo con supuestos explícitos	No debe mezclarse con gasto ordinario o inversión ya prevista
Escenario	Cadena causal y condiciones verificables	Describe posibilidad; no afirma probabilidad automática

2. Cómo se construyen los escenarios

Cada escenario parte de una decisión identificable y sigue sus dependencias. Una independencia escocesa requiere primero una consulta legal o un cambio político equivalente; sólo después aparecen reconocimiento, reparto patrimonial y adhesión europea. Una Irlanda unida requiere una evaluación del secretario de Estado, una votación en el Norte y consentimiento en la República. La cadena impide saltar desde una encuesta a un Estado nuevo. Cuando falta un eslabón, el informe lo trata como condición y no como hecho implícito.

Las variables se agrupan en tres horizontes. En el corto plazo importan autoridad legal, confianza, liquidez y continuidad de servicios. En la transición importan moneda, frontera, deuda, administración y seguridad. En el largo plazo dominan productividad, demografía, inversión y pertenencia internacional. Un costo transitorio no prueba inviabilidad permanente; una ganancia de largo plazo no paga por sí sola los primeros presupuestos. La evaluación conserva ambas escalas para evitar que cada parte seleccione el período favorable.

La incertidumbre se expresa mediante sensibilidad. Si Londres paga pensiones acumuladas, el costo de la unidad irlandesa cae; si Escocia arrienda Faslane durante quince años, Londres gana tiempo y Edimburgo retiene una contradicción política; si el Reino Unido se alinea más con la UE, las nuevas fronteras comerciales pesan menos. Estos supuestos no se eligen para producir un resultado central único. Se muestran porque constituyen las decisiones que los gobiernos realmente podrían negociar.

CAPÍTULO I | EL MOMENTO CONSTITUCIONAL DE 2026

1. La coyuntura

El ciclo político de 2026 reunió hechos que antes aparecían separados. El SNP volvió a ser la primera fuerza de Holyrood con 57 de 129 escaños, sin mayoría propia; Plaid Cymru se convirtió en la principal fuerza del Senedd y Rhun ap Iorwerth asumió como primer ministro; y Michelle O'Neill continuó como primera ministra de un Ejecutivo norirlandés que comparte poder con una viceprimera ministra unionista. En Londres, Andy Burnham llegó a Downing Street en julio. Ninguno de esos cambios convocó por sí mismo una consulta, pero alteraron quién formula la demanda, quién la responde y qué costos políticos enfrenta una negativa.



El 28 de agosto el Gobierno escocés publicó un proyecto de ley de referéndum de independencia. Su publicación expresa preparación política; no elimina la sentencia de 2022 ni transfiere la competencia reservada. El 14 de septiembre, los líderes de SNP, Plaid Cymru y Sinn Féin **firmaron en Cardiff un memorando que pidió a Londres preparar y facilitar el cambio constitucional**. El instrumento fue un acuerdo entre partidos, no un tratado entre gobiernos, y no obliga jurídicamente al primer ministro. Su importancia está en la coordinación: presenta tres disputas como una crisis común de consentimiento.

Esa coordinación tiene límites. **El Acuerdo de Belfast otorga a Irlanda del Norte un mecanismo que Escocia y Gales no poseen**. Sinn Féin busca una unidad irlandesa donde la República absorba y transforme instituciones; SNP y Plaid proponen Estados separados que luego podrían solicitar ingreso en la Unión Europea. Los calendarios sociales tampoco coinciden: Escocia conserva una división cercana al empate, Gales aún muestra apoyo minoritario a la independencia y la encuesta NILT 2025 registró 36 % por la reunificación y 45 % por permanecer en el Reino Unido. Una fotografía de convergencia partidaria no borra esas diferencias.



La respuesta de Londres puede moverse entre tres estrategias. **La primera es el bloqueo jurídico**: negar una orden equivalente a la sección 30 usada en 2014. La segunda es **la competencia política**: mejorar servicios, financiación y cooperación para reducir el atractivo de la salida. La tercera **es la reforma constitucional**: convertir la devolución asimétrica en un pacto más estable de competencias y recursos. Cada una cambia el problema. El bloqueo gana tiempo pero puede alimentar la denuncia democrática; la competencia exige resultados; la reforma necesita aceptar que el centro ya no fija unilateralmente todas las reglas.

El memorando de Cardiff también introduce una cuestión de secuencia. Si Westminster negocia simultáneamente tres procesos, su capacidad administrativa y fiscal quedaría sometida a presión. Si resolviera uno por uno, el resultado inicial reconfiguraría los siguientes: una Escocia independiente podría normalizar la secesión o, si la transición fuese costosa, enfriar otras demandas. Una consulta irlandesa sin preparación podría polarizar; una preparación prolongada podría hacer visible la viabilidad del cambio. Por ello la disputa sobre cuándo comenzar no es secundaria: distribuye información y poder.

La noticia de 2026 debe formularse con precisión. Existe una alianza política más explícita entre fuerzas nacionalistas, un proyecto escocés listo para ser tramitado si cambia la competencia y una jefatura galesa favorable a que Gales controle la decisión. **No existen tres referéndums formalmente convocados, no hay fecha para un border poll y no se ha acordado un proceso de disolución.** El Reino Unido atraviesa una fase de contestación constitucional coordinada, con rutas jurídicas distintas y electorados todavía abiertos.

Actor	Instrumento de 2026	Efecto inmediato	Obstáculo principal
Escocia	Proyecto de ley de referéndum	Define una propuesta de consulta	Competencia reservada y falta de acuerdo con Londres
Gales	Gobierno de Plaid Cymru	Eleva el debate desde la oposición al Ejecutivo	Apoyo social minoritario y dependencia institucional
Irlanda del Norte	Coordinación de Sinn Féin	Conecta la reunificación con la crisis de la unión	Umbral político para que el secretario de Estado convoque
Londres	Nuevo gobierno de Burnham	Puede mantener el veto o ofrecer reforma	Legitimidad de negar consultas ante mandatos persistentes

CAPÍTULO II | UNA UNIÓN ANTIGUA QUE NUNCA FUE INMÓVIL

1. Historia institucional

La afirmación de que el Reino Unido es el orden político más antiguo todavía en pie funciona como tesis periodística si se explica su alcance. Westminster, la Corona y el common law exhiben una continuidad rara; sin embargo, el Estado actual no nació terminado. Las Leyes de Gales del siglo XVI incorporaron jurídicamente el principado a Inglaterra; *la Unión de las Coronas de 1603 colocó a un mismo monarca sobre reinos con parlamentos distintos; los actos de 1707 crearon Gran Bretaña; la unión de 1801 añadió Irlanda; la partición de 1921–22 dejó seis condados dentro del Estado; el nombre actual quedó consolidado en 1927.*



Cada etapa combinó consentimiento, coerción y cálculo material. En *Escocia*, la unión parlamentaria aseguró acceso al mercado imperial y resolvió una crisis dinástica, a la vez que enfrentó oposición. *Conservó derecho, Iglesia y educación, instituciones que más tarde sostendrían una identidad política propia.* En *Gales*, la integración fue más temprana y profunda: *el mismo sistema jurídico y la representación en Westminster hicieron menos visible una frontera constitucional, aunque la lengua y las instituciones culturales preservaron diferencia.* Irlanda mostró el límite más violento de la construcción estatal.

La expansión imperial dio a la unión una economía política. Puertos, manufacturas, fuerzas armadas y redes financieras de sus distintas naciones participaron del imperio. Las guerras mundiales y el Estado social agregaron un idioma de ciudadanía común: impuestos nacionales, defensa, pensiones y servicios. Ese entramado explica por qué la separación moderna no se reduce a dibujar fronteras. Se trata de desanudar derechos adquiridos y cadenas productivas que se construyeron durante siglos bajo una tesorería, una moneda y una política exterior compartidas.

La descentralización desde 1998 fue una adaptación de esa continuidad. Escocia recuperó un parlamento con competencias legislativas amplias; Gales pasó de una asamblea administrativa a un Senedd legislativo; Irlanda del Norte reconstruyó el gobierno compartido dentro del acuerdo de paz. Inglaterra recibió alcaldías y autoridades combinadas, pero no un parlamento nacional. La devolución buscó acomodar naciones sin federalizar formalmente el Estado. Su éxito creó la paradoja actual: fortaleció la administración territorial y con ella la capacidad de imaginar soberanía.

La idea de perpetuidad jurídica tampoco resuelve la cuestión. Los tratados pueden declarar una unión “para siempre”, pero un parlamento soberano puede legislar su transformación y los actores políticos pueden negociarla. La soberanía parlamentaria británica facilita cambios formales porque no exige una única constitución codificada; al mismo tiempo, deja a los territorios sin una garantía constitucional rígida de consulta. La flexibilidad que permitió sobrevivir también concentra en Westminster la llave legal del cambio.

El precedente irlandés demuestra que la pérdida de territorio puede producir continuidad y mutación simultáneas. El Estado no desapareció después de 1922; cambió nombre, frontera, composición parlamentaria y relación con la isla. Una salida escocesa tampoco implicaría necesariamente extinción jurídica del Reino Unido en los organismos internacionales. Pero si salieran Escocia, Gales e Irlanda del Norte, la etiqueta “Reino Unido” describiría una unión que ya no existiría entre naciones constitutivas. Inglaterra tendría que decidir si conserva la forma monárquica, el nombre y la arquitectura de Westminster o adopta una constitución nueva.

CAPÍTULO III | SOBERANÍA, AUTODETERMINACIÓN Y VETO

1. Derecho y legitimidad

La controversia escocesa suele resumirse como choque entre autodeterminación y veto inglés. La fórmula es políticamente potente, pero jurídicamente incompleta. La Scotland Act reserva la unión de los reinos y el

Parlamento británico. **En 2022 la Corte Suprema concluyó por unanimidad que una ley escocesa para celebrar una consulta sobre independencia se relacionaría más que de manera remota con esas materias reservadas.** El carácter consultivo no la volvía inocuo: su autoridad política afectaría la unión y la soberanía de Westminster.

La Corte examinó además el derecho internacional. **El principio de autodeterminación puede respaldar independencia externa en contextos coloniales, de dominación extranjera o de negación grave del acceso al gobierno. Fuera de esos casos, opera normalmente dentro del Estado mediante participación y autonomía.** Escocia dispone de representación, elecciones y un parlamento propio; por ello el principio no transformó una competencia reservada en competencia de Holyrood. La sentencia decidió quién podía legislar, no si la independencia era moralmente deseable ni si Westminster debería autorizarla.

Esta distinción explica el “no principio” atribuido a Inglaterra. El gobierno central no necesita negar que un pueblo pueda aspirar a decidir; sostiene que la decisión válida requiere el procedimiento del orden constitucional. Los independentistas responden que un procedimiento controlado permanentemente por una parte interesada convierte un derecho político en permiso discrecional. Entre ambas posiciones existe un espacio de negociación: acordar umbrales de mandato, periodicidad, pregunta, franquicia y efectos antes de conocer el resultado. **El acuerdo de Edimburgo de 2012 demostró que la flexibilidad legal existe cuando hay voluntad política.**

Gales enfrenta una dificultad mayor porque nunca celebró un plebiscito de independencia y su autonomía fiscal es menor. Una mayoría del Senedd (parlamento gales) favorable a consultar tendría gran peso político, pero la competencia seguiría reservada. La Comisión Independiente sobre el Futuro Constitucional de Gales descartó el statu quo como opción estable y estudió autonomía reforzada, federalismo e independencia, sin declarar que una sola vía fuese inevitable. Su recomendación central fue ampliar la capacidad democrática de Gales y asegurar que los cambios descansan en información pública.

Irlanda del Norte representa otra doctrina: consentimiento concurrente y posibilidad legal de cambio. El secretario de Estado debe convocar una consulta si le parece probable una mayoría favorable a una Irlanda unida. No hay una fórmula estadística publicada que active automáticamente el deber. Religión, voto partidario, identidad nacional y respuesta hipotética a un referéndum miden fenómenos distintos. La discrecionalidad evita reducir el proceso a una encuesta, pero también exige transparencia suficiente para que la demora no parezca manipulación.

Cualquier referéndum necesitaría reglas sobre información y consecuencia. Una pregunta binaria oculta decisiones sobre moneda, derechos, ciudadanía, fronteras y servicios. Exigir un plan completo antes de votar puede favorecer al statu quo, cuyo funcionamiento ya se conoce; votar sin un mínimo de diseño traslada la elección real a negociaciones posteriores. Una solución equilibrada publica principios vinculantes, identifica asuntos abiertos y somete el acuerdo final a ratificación o control parlamentario. El objetivo no es eliminar incertidumbre, sino impedir que cada bando venda como certeza su escenario preferido.

Territorio	Fundamento jurídico	Quién habilita	Después de un voto favorable
Escocia	Transferencia temporal o ley de Westminster	Parlamento y gobierno británicos	Negociación y legislación de independencia
Gales	Cambio de competencias o ley británica	Westminster	Construcción institucional y tratado de separación
Irlanda del Norte	Acuerdo de Belfast y Northern Ireland Act	Secretario de Estado; consulta también en Irlanda	Propuestas de ambos gobiernos y legislación en ambas jurisdicciones

2. Legitimidad de negar y legitimidad de consultar

El gobierno central puede tener razón jurídica y perder autoridad política. Si una mayoría territorial clara, repetida y expresamente comprometida con una consulta es rechazada sin criterio temporal, la competencia

reservada comienza a parecer un cierre permanente. Pero el gobierno territorial también puede tener competencia moral y exagerar el mandato: una mayoría de escaños obtenida con menos de la mitad de los votos, en una elección sobre múltiples asuntos, no equivale automáticamente al consentimiento para abandonar el Estado.

Una regla previa puede reducir ese conflicto. Por ejemplo, habilitar una consulta cuando una mayoría de votos o del parlamento territorial respalde durante dos elecciones un manifiesto inequívoco, con un intervalo mínimo entre referéndums. No existe hoy esa regla para Escocia o Gales y adoptarla sería una decisión política de Westminster. Su ventaja es hacer predecible el acceso; su costo es constitucionalizar campañas permanentes. La alternativa es discreción, flexible pero sospechosa cuando el gobierno central es parte interesada.

La experiencia de 2014 muestra una salida: reconocer el mandato, transferir competencia por tiempo limitado y acordar una pregunta supervisada. El precedente no obliga a repetir una consulta con cada elección; demuestra que la Constitución británica puede acomodar el principio democrático sin admitir secesión unilateral. La cuestión contemporánea es definir qué cambio material desde 2014 justificaría volver a usar esa flexibilidad, y quién tiene autoridad para juzgarlo.

CAPÍTULO IV | INGLATERRA DESPUÉS DE LA UNIÓN

1. El actor mayoritario

Inglaterra representa alrededor de 84,6 % de la población del Reino Unido según las proyecciones de 2024. Esa escala explica su dominio aritmético en Westminster y, al mismo tiempo, oculta su condición nacional. Las políticas “británicas” son con frecuencia políticas inglesas en salud o educación cuando las otras naciones gestionan esos servicios. ***La Cámara de los Comunes legisla a la vez para el Estado y, en materias no descentralizadas, para Inglaterra. Una disolución obligaría a separar esos papeles y a responder quién habla por Inglaterra.***

La primera consecuencia sería parlamentaria. La salida de Escocia eliminaría sus escaños y podría alterar mayorías partidarias; una salida adicional de Gales e Irlanda del Norte convertiría Westminster en un parlamento casi enteramente inglés, con representación residual de territorios que permanecieran vinculados. Mantener el nombre y los procedimientos actuales sería jurídicamente posible, pero políticamente extraño.

Podría emerger una constitución inglesa, un sistema regional más fuerte o una continuidad centralizada alrededor de Londres.

La segunda consecuencia sería fiscal. Inglaterra aporta la mayor masa de ingresos y recibe el mayor volumen absoluto de gasto. El sistema Barnett determina variaciones de bloques territoriales a partir de decisiones inglesas comparables, no una transferencia anual negociada desde cero. Las independencias terminarían esos bloques y obligarían a asignar deuda, activos y compromisos. El contribuyente inglés podría dejar de financiar parte de los saldos territoriales, pero asumiría costos de transición, nuevas agencias fronterizas y, en el escenario escocés, la infraestructura nuclear sustitutiva.

La tercera sería geoeconómica. Una frontera escocesa dividiría el corredor de la costa este, redes eléctricas, cuencas laborales y cadenas de suministros. Una frontera galesa cruzaría cientos de carreteras y relaciones diarias con Liverpool, Manchester, Bristol y las Midlands. Una Irlanda unida eliminaría la única frontera terrestre actual del Estado, pero consolidaría controles comerciales en el mar de Irlanda si Gran Bretaña siguiera fuera del mercado europeo. Los acuerdos más racionales serían profundos; la política de soberanía puede, sin embargo, preferir controles visibles.

La cuarta sería identitaria y simbólica. La bandera, el himno, el nombre estatal, la selección olímpica, la radiodifusión y las instituciones culturales incorporan símbolos de varias naciones. No desaparecerían de inmediato, pero se volverían negociables. La Corona podría continuar en Inglaterra y en una Escocia monárquica mediante coronas jurídicamente separadas. ***La pregunta no es sólo qué pierde Inglaterra, sino si acepta verse como Estado nacional en vez de centro tácito de una unión multinacional.***

La política inglesa contiene respuestas contradictorias. Parte del electorado valora la unión como poder compartido, memoria y seguridad. Otra parte puede considerar injustas las fórmulas territoriales o aceptar que las naciones se marchen. El Brexit mostró que la soberanía puede pesar más que las predicciones económicas; el mismo razonamiento puede aplicarse en ambos sentidos. ***Para conservar la unión, Inglaterra tendría que ofrecer instituciones que limiten su mayoría. Para vivir sin ella, tendría que construir capacidad fronteriza y una narrativa de continuidad menos imperial.***

LA ASIMETRÍA CENTRAL

La unión ofrece a Inglaterra influencia dominante sin darle un parlamento propio; ofrece a las otras naciones parlamentos propios sin darles control final sobre la unión. Esa combinación fue funcional mientras el conflicto territorial fue administrable. Bajo presión, cada parte percibe una desigualdad diferente.

CAPÍTULO V | ESCOCIA: MANDATO, OPINIÓN Y CAPACIDAD ESTATAL

1. Política

El independentismo escocés llega a 2026 con una paradoja. Es la fuerza institucional más desarrollada de la periferia británica: gobierna desde 2007, administró un referéndum pactado en 2014 y dispone de documentos sobre moneda, Constitución, seguridad social, migración y defensa. Pero perdió aquella votación y todavía no demuestra una mayoría estable e inequívoca. El SNP obtuvo 57 escaños en 2026, suficientes para liderar, no para afirmar que toda decisión del Parlamento constituye por sí misma un mandato de ruptura.

La opinión está partida por la forma de preguntar. La encuesta de More in Common de 2026 registró 38 % a favor, 38 % en contra, 10 % indeciso y 15 % que no votaría. Si se excluye a quienes no expresan voto, aparece un empate; si se conserva el universo completo, ningún lado se acerca a la mitad. Otras series convierten a los indecisos mediante modelos distintos. Para medir tendencia importan el mismo encuestador, la misma pregunta y varias olas. Un resultado aislado puede reflejar gobierno, economía o campaña, más que un cambio constitucional duradero.

Las coaliciones sociales también cambian. El apoyo independentista suele ser mayor entre votantes jóvenes y del SNP o los Verdes; el unionismo combina conservadores, laboristas y liberal demócratas, y aumenta entre grupos de mayor edad. El Brexit reorganizó parte del mapa: una Escocia proeuropea puede imaginar la independencia como retorno a Europa, pero los votantes que prefieren la unión y la UE deben elegir qué vínculo valoran más. Las actitudes hacia la monarquía, la fiscalidad y la energía no siguen exactamente la misma línea.

La capacidad administrativa escocesa es significativa. Holyrood legisla, el Gobierno recauda impuestos descentralizados y existen sistemas propios de derecho, educación, policía y salud. El salto de gobierno autónomo a Estado exigiría banco central o autoridad monetaria, aduanas, servicio exterior, administración migratoria, organismos de competencia y comunicaciones, seguridad nacional y gestión de deuda. Algunas funciones pueden nacer a partir de instituciones existentes; otras requieren contratación, datos, edificios, tratados y continuidad operativa.

El proyecto constitucional oficial propone una constitución escrita, derechos sociales y permanencia inicial de la monarquía. Su fuerza política es ofrecer continuidad durante la transición. Su debilidad es que muchas piezas dependen de acuerdos externos: reconocimiento, reparto de activos, uso de la libra, acceso a sistemas de pagos, frontera comercial y adhesión europea. ***Un libro blanco puede comprometer al gobierno que lo publica; no obliga al gobierno británico, a los mercados ni a los 27 Estados de la Unión Europea.***

El mandato más sólido sería secuencial: ganar una elección con una promesa clara, lograr habilitación, obtener mayoría popular y negociar un acuerdo ratificable. Si Westminster rechaza indefinidamente el primer paso, el SNP puede internacionalizar el conflicto o tratar elecciones como plebiscito, pero ninguna vía crea automáticamente independencia jurídica. La presión política podría crecer, mientras aumenta el riesgo de que la disputa procedimental sustituya la discusión material sobre cómo funcionaría el Estado.

Indicador	Dato	Lectura correcta
Referéndum 2014	55,3 % No; 44,7 % Sí	Mandato para permanecer bajo las condiciones de 2014
Elección 2026	SNP 57 de 129 escaños	Primera fuerza, sin mayoría propia
Encuesta MiC 2026	38 Sí; 38 No; 10 NS; 15 no votaría	Electorado dividido; resultado depende de base y participación
Capacidad institucional	Parlamento, gobierno, sistema jurídico y fiscalidad parcial	Reduce costos de creación, pero no reemplaza funciones reservadas

CAPÍTULO VI | ESCOCIA: CUENTAS PÚBLICAS, MONEDA Y FRONTERA

1. Economía política

El debate económico escocés se concentra en un número: el saldo fiscal neto. GERS estimó para 2025–26 ingresos públicos de £98.300 millones y un saldo negativo equivalente a 10,9 % del PIB, frente a 4,2 % para el Reino Unido. Es una medida de cuánto ingreso y gasto se atribuye a Escocia bajo políticas británicas. Incluye una porción de defensa, deuda y servicios centrales. ***No demuestra que el déficit independiente fuera idéntico, pero obliga a explicar qué gasto desaparecería, qué impuesto crecería y qué ritmo de ajuste sería socialmente aceptable.***

El PIB escocés fue de aproximadamente £209.600 millones en 2024. En 2025 la economía habría crecido 1,4 %, con servicios y construcción en expansión y producción y manufacturas en retroceso. La productividad por hora cayó 1,5 % en 2024, aunque su crecimiento medio desde 2008 superó el promedio británico. Estos datos describen una economía avanzada con sectores competitivos y debilidades comunes al Reino Unido. La independencia no crea ni destruye automáticamente productividad; puede modificar inversión, acceso a mercados, política industrial y costo de capital.

La moneda ordena muchos de esos efectos. Usar la libra sin unión formal reduce la alteración inicial para hogares y contratos, pero deja al nuevo Estado sin banco central emisor de la moneda que usa, sin prestamista de última instancia garantizado y sin voto en el Banco de Inglaterra. Una moneda propia proporciona instrumentos y señoreaje, pero exige reservas, credibilidad, supervisión bancaria y una conversión de balances. Una unión monetaria formal necesitaría consentimiento británico y disciplina fiscal compartida. La adopción del euro sólo llegaría después de ingresar en la UE y cumplir condiciones; no es una solución del día uno.

Los mercados mirarían el déficit inicial, la deuda asumida, la base tributaria y las instituciones. Institute for Government ha señalado que un déficit sostenible podría necesitar acercarse a 3 % del PIB y que una nueva deuda podría pagar una prima sobre los bonos británicos; sus estimaciones fueron formuladas en otro entorno de tasas y no deben convertirse en cotización de 2026. El principio permanece: cuanto más incierta la moneda y más abrupto el ajuste, mayor el costo de financiación. Un acuerdo de deuda ordenado y reglas fiscales transparentes reducirían la prima.

La frontera económica es el segundo eje. En 2023 Escocia exportó £55.400 millones al resto del Reino Unido y £37.700 millones internacionalmente. El resto del Reino Unido absorbió más que todos los mercados exteriores juntos. La adhesión a la UE abriría ventajas regulatorias y comerciales con el bloque, pero si Inglaterra continúa fuera de la unión aduanera europea aparecerían declaraciones, controles sanitarios y reglas de origen en el principal corredor escocés. La frontera puede administrarse con tecnología y acuerdos; no puede hacerse irrelevante si los regímenes divergen.

El debate se vuelve falso cuando contrapone “mercado británico” a “Europa” como si Escocia pudiera maximizar ambos sin condiciones. La estrategia óptima dependerá de la profundidad del acuerdo UE–Reino Unido, alineación regulatoria escocesa, tratamiento de energía y servicios, y disposición de Londres a un área económica común. Una independencia cooperativa podría conservar movilidad y reconocimiento en

muchos sectores. Una separación conflictiva elevaría costos incluso antes de la fecha formal mediante inversión postergada y traslado de sedes.

Integración económica con el resto del Reino Unido



Las metodologías y unidades no son homogéneas; el gráfico muestra exposición, no un ranking.

Figura 1. Tres mediciones oficiales de exposición al mercado interno británico

Fuentes: Export Statistics Scotland 2023; Trade Survey for Wales 2022; NISRA Economic Trade Statistics 2024. Las metodologías y unidades difieren.

CAPÍTULO VII | ESCOCIA: POBLACIÓN, MIGRACIÓN, ENERGÍA Y TERRITORIO

1. Recursos y sociedad

La población escocesa fue estimada en 5,547 millones en 2024. La proyección central de la ONS la sitúa en 5,475 millones en 2049, una reducción de 1,3 %, mientras Inglaterra crecería 5,5 %. El problema no es una caída instantánea, sino el cambio de estructura: más personas mayores, menos nacimientos y presión sobre la fuerza laboral y los servicios. Como toda proyección, el resultado depende de la migración. La independencia modificaría precisamente las políticas y los incentivos que sostienen ese supuesto.

El censo de 2022 registró 5.436.600 habitantes y mostró que el crecimiento desde 2011 se debió a la migración. El número de residentes nacidos en Escocia cayó en 90.400; los nacidos en el resto del Reino Unido aumentaron en 49.200 y los nacidos en el exterior en 185.600. Había aproximadamente 554.900 personas nacidas fuera del Reino Unido y 563.500 nacidas en otra parte del Reino Unido. Esos grupos no son electorados uniformes, pero convierten ciudadanía y movilidad en cuestiones familiares, no abstractas.

En el año a mediados de 2025, unas 50.200 personas llegaron desde el resto del Reino Unido y 41.600 se movieron en sentido inverso, con saldo de +8.600. Una frontera migratoria estricta con Inglaterra sería difícil de reconciliar con ese flujo y con el mercado laboral integrado. Escocia propone una política más receptiva para atraer trabajadores y estudiantes. *Si permaneciera en un Common Travel Area ampliado, la movilidad británico-irlandesa podría continuar, aunque Edimburgo tendría que coordinar visados para evitar que su territorio se convirtiera en ruta no controlada hacia Inglaterra.*

La identidad nacional es amplia pero no idéntica al voto soberanista. El censo informa que 82,7 % declaró alguna identidad escocesa y 62,4 % escocesa solamente, mientras otros combinaron identidades o se declararon británicos. Una persona puede sentirse escocesa y preferir la unión; otra puede apoyar la independencia por razones democráticas sin identidad excluyente. *El diseño de ciudadanía debería reconocer esa superposición, permitir doble nacionalidad en lo posible y proteger residencia, pensiones y participación de quienes se mudaron bajo la unión.*

La energía ofrece activos y disputas. Escocia reúne recursos de hidrocarburos del mar del Norte, eólica marina, hidroeléctrica y conexiones eléctricas con Inglaterra. La delimitación marítima afectaría ingresos y licencias; las reservas declinantes limitan la idea de financiar indefinidamente el Estado con petróleo. Las redes y el mercado eléctrico operan a escala británica. Separarlas sería costoso, de modo que un mercado

integrado con regulación y pagos por transmisión resulta más probable que una ruptura física. La transición climática amplía oportunidades industriales y exige capital estable.

El territorio también determina desigualdades internas. Highlands e islas enfrentan costos de transporte, vivienda y servicios; Aberdeen está expuesta a la transición petrolera; Glasgow concentra privaciones urbanas; Edimburgo reúne finanzas y administración. La independencia no resuelve por sí sola esas fracturas. Un nuevo Estado tendría que decidir cuánto centraliza en Edimburgo y cómo distribuye empleos públicos, infraestructura y rentas energéticas. El argumento de soberanía será creíble si muestra una geografía de beneficios, no sólo una nueva capital.

Cambio demográfico proyectado, 2024–2049

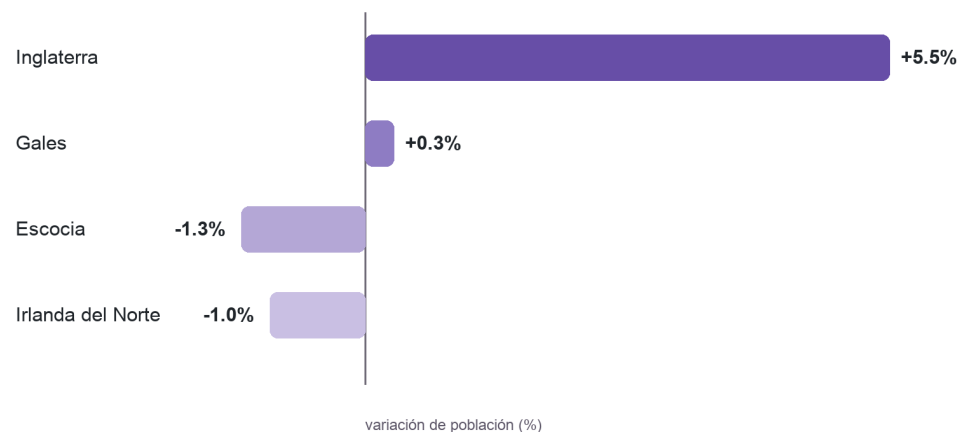


Figura 2. Proyección demográfica territorial

Fuente: ONS, National population projections, 2024-based. La proyección aplica supuestos y no incorpora una eventual independencia.

CAPÍTULO VIII | GALES: DE LA DEVOLUCIÓN A LA CUESTIÓN NACIONAL

1. Política, lengua y opinión

Gales llegó más tarde que Escocia a una legislatura con poderes extensos. El referéndum de 1997 aprobó la devolución por una mayoría mínima; la institución evolucionó después hacia un Senedd con potestades legislativas y fiscales limitadas. Esa trayectoria importa porque muestra que la opinión constitucional puede cambiar mediante práctica institucional. La victoria de Plaid Cymru en 2026 y la elección de Rhun ap Iorwerth colocaron por primera vez a un partido independentista al frente del gobierno, aunque el mandato electoral también se construyó sobre salud, vivienda, transporte y costo de vida.

La Comisión Independiente sobre el Futuro Constitucional concluyó en 2024 que el statu quo no ofrecía estabilidad y analizó tres rutas viables: autonomía reforzada, una estructura federal e independencia. No afirmó que todas tuvieran igual probabilidad ni que el apoyo popular estuviera decidido. Su trabajo es valioso porque calcula funciones de Estado, relaciones intergubernamentales y riesgos sin reducir el debate sobre la identidad. Para el nuevo gobierno, convierte la independencia en una opción que debe demostrarse, no sólo proclamarse.

La opinión galesa es más cauta que la escocesa. En la investigación representativa encargada por la comisión, apenas 6 % mencionó espontáneamente la independencia al preguntar qué cambio deseaba, aunque el apoyo aumentaba cuando se ofrecían opciones. En la consulta pública autoseleccionada, la independencia recibió una proporción mucho mayor; esa muestra no representa a la población. La diferencia ilustra por qué el método importa. Quienes responden voluntariamente a una consulta constitucional están más movilizados que el ciudadano promedio.

La lengua organiza otra dimensión. El censo de 2021 registró 538.000 hablantes de galés, 17,8 % de la población de tres años o más, por debajo de 19,0 % en 2011. La política pública busca un millón de hablantes para 2050, pero educación, vivienda y migración interna influyen en la transmisión. La

independencia puede ser presentada como protección cultural; también puede inquietar a los anglófonos si se comunica como pertenencia exclusiva. Un Estado viable necesitaría igualdad de derechos y servicios bilingües con capacidad administrativa real.

La identidad revela superposición: 55,2 % declaró identidad “galesa solamente” y 18,5 % “británica solamente” en el censo, con otros que combinaron categorías. Esos porcentajes no predicen el voto constitucional. La nación cultural es más amplia que el independentismo y permite varios proyectos: una voz galesa fuerte dentro del Reino Unido, un federalismo británico o soberanía estatal. Plaid debe convencer precisamente a quienes se sienten galeses pero temen el costo material de una frontera.

El problema democrático para Gales es doble. Westminster controla la competencia de unión, y la mayoría inglesa puede rechazar una consulta; al mismo tiempo, un referéndum prematuro podría fijar durante años una derrota del proyecto. Por eso el gobierno puede priorizar la transferencia del poder de decidir, una convención ciudadana, información fiscal y expansión institucional. Esa estrategia construye legitimidad antes de elegir fecha. Su riesgo es que los votantes la interpreten como distracción respecto de servicios públicos o como una independencia por etapas sin mandato claro.

Dimensión	Dato disponible	Implicación
Gobierno	Plaid Cymru encabeza el Ejecutivo desde mayo de 2026	La opción independentista entra en la gestión cotidiana
Lengua	538.000 hablantes; 17,8 % en 2021	La protección cultural requiere políticas de largo plazo
Identidad	55,2 % galesa solamente	Identidad nacional y apoyo a la independencia no son equivalentes
Opinión	Bajo apoyo espontáneo en el estudio de 2023	La persuasión debe preceder a una consulta vinculante

CAPÍTULO IX | GALES: VIABILIDAD FISCAL, COMERCIO Y ESTADO

1. Economía y administración

Gales entra al debate con una brecha de ingresos y gasto mayor que la media británica. La Comisión Constitucional citó una estimación de déficit fiscal de £14.400 millones, construida bajo el arreglo vigente. Parte corresponde a funciones británicas y a una asignación territorial de deuda y defensa que cambiaría; otra parte refleja una base tributaria de menores ingresos, productividad y empleo. ***El número no hace imposible la independencia. Indica que una transición sin transferencias británicas necesitaría una combinación explícita de ajuste, impuestos, deuda y crecimiento.***

La integración comercial con Inglaterra es intensa. La Trade Survey for Wales estimó que, en 2022, 47 % de las ventas permaneció en Gales, 33 % fue al resto del Reino Unido y 17 % a destinos internacionales. En compras, 42 % procedió del resto del Reino Unido, 24 % de Gales y 17 % del exterior. Los datos cubren empresas encuestadas y no todo el PIB, pero muestran cadenas británicas más grandes que el comercio internacional. En 2024 las exportaciones galesas de bienes fueron £16.500 millones y cayeron 15,1 %.

Una frontera aduanera con Inglaterra tendría efectos concentrados en manufacturas, alimentos, logística y empresas pequeñas. El corredor M4 vincula sur de Gales con Bristol y Londres; el norte está conectado con Liverpool y Manchester. La eventual adhesión a la UE introduciría un dilema semejante al escocés: alinearse con el mercado europeo supone aplicar su arancel exterior y sus controles frente a Inglaterra. Un acuerdo británico-europeo más estrecho puede reducir la fricción; Gales no lo controlaría por sí solo.

La independencia también exige funciones de Estado. Cardiff debería crear tesorería plena, recaudación aduanera, seguridad social, banco o autoridad monetaria, administración migratoria, relaciones exteriores, regulación económica y defensa. La Comisión señaló que algunas capacidades pueden expandirse desde organismos galeses y otras demandan años. El costo depende de la estrategia: replicar cada agencia británica

es caro; compartir servicios mediante tratados reduce gasto, pero limita autonomía y requiere cooperación de Londres.

La moneda presenta opciones similares a Escocia con una escala financiera menor. La libra unilateral preserva contratos, pero no acceso garantizado al Banco de Inglaterra. Una moneda galesa requiere reservas y un sistema bancario creíble. Una unión monetaria formal haría que el Estado británico restante evalúe riesgos de rescate y disciplina presupuestaria. La decisión no puede postergarse como símbolo: determina cómo se paga la deuda, dónde se domicilian bancos y qué pasa con hipotecas y salarios.

La política de desarrollo tendría que enfrentar desigualdad regional, baja productividad y envejecimiento sin depender de una devaluación milagrosa. Gales posee energía eólica, puertos, universidades, manufactura aeroespacial y automotriz, turismo y una posición entre Irlanda e Inglaterra. Puede diseñar impuestos y política industrial más adaptados, pero también pierde escala y poder de negociación. La viabilidad no equivale a ausencia de costo: casi cualquier Estado pequeño puede funcionar; la pregunta política es qué nivel de vida y qué distribución produciría cada transición.

El Estado británico restante también tendría incentivos para un acuerdo estrecho. Una frontera dura perjudicaría puertos ingleses y cadenas de suministro; la infraestructura hídrica y energética cruza la frontera; millones de familias comparten residencia y empleo. La negociación podría incluir una zona de viaje común, mercado energético, reconocimiento profesional y mecanismos fiscales temporales. La hostilidad política transformaría problemas administrables en símbolos de soberanía y elevaría el costo para ambos lados.

CAPÍTULO X | GALES: DEMOGRAFÍA, MIGRACIÓN Y COHESIÓN

1. Población

La población galesa fue estimada en 3,175 millones a mediados de 2025, una caída anual de 0,1 %. Las muertes, 35.600, superaron ampliamente los 26.500 nacimientos. El 22,2 % tenía 65 años o más. La migración neta internacional fue de apenas 1.700, mientras el saldo desde el resto del Reino Unido fue +4.900. La estructura muestra dependencia de movilidad británica y un desafío de envejecimiento que continuaría cualquiera que fuese el estatus constitucional.

La proyección de la ONS mantiene casi estable la población entre 2024 y 2049, de 3,187 a 3,195 millones. La estabilidad del total puede ocultar menos población en edad laboral y más demanda de salud y cuidados. Un Estado independiente heredaría pensiones acumuladas y expectativas de servicios, y necesitaría acordar con Londres la responsabilidad sobre derechos contributivos previos. A largo plazo, la base tributaria depende de atraer y retener jóvenes, elevar participación laboral y productividad, no sólo de sumar residentes.

Una política migratoria propia podría facilitar visas para salud, cuidados, agricultura y universidades. El beneficio sería mayor si los inmigrantes se asientan fuera de Cardiff y si existen vivienda, transporte y reconocimiento de títulos. La dificultad es mantener una frontera abierta con Inglaterra mientras se aplican reglas distintas. El Common Travel Area protege movimientos de ciudadanos británicos e irlandeses; no elimina la necesidad de controlar a nacionales de terceros países. La cooperación de datos y la fiscalización en empleadores serían centrales.

La migración interna también toca la lengua. En comunidades rurales y costeras, compra de segundas viviendas, turismo y llegada de residentes anglófonos pueden elevar precios y reducir el uso cotidiano del galés. Pero tratar a los recién llegados como amenaza debilitaría la cohesión y capacidad económica. La política puede combinar vivienda principal, planificación local, educación bilingüe e integración. Un proyecto nacional incluyente necesita convertir la lengua en acceso, no en prueba de pureza.

La ciudadanía debería ofrecer continuidad. Quienes tengan ciudadanía británica y conexión con Gales podrían adquirir la nueva; la doble nacionalidad dependería de las leyes de ambos Estados, y el Reino Unido suele permitirla. El derecho de residencia, voto y acceso a servicios para británicos establecidos debería quedar garantizado en el tratado. Un registro precipitado o criterios étnicos crearían litigios y salida de

trabajadores. El objetivo práctico es que el día de la independencia no convierta a vecinos en extranjeros funcionales.

La demografía ayuda a comprender por qué el debate constitucional no se resuelve con una identidad histórica. Gales necesitará ingresos por trabajador, instituciones que retengan talento y una relación abierta con Inglaterra. La soberanía puede facilitar decisiones adaptadas; también puede introducir una frontera en el circuito migratorio que hoy sostiene su población. El balance depende del diseño y de la confianza, no de la mera cifra total.

CAPÍTULO XI | IRLANDA DEL NORTE: CONSENTIMIENTO, PAZ Y DOS IDENTIDADES

1. El proceso constitucional

Irlanda del Norte no es simplemente otra nación que podría separarse. Su posible cambio está incorporado al acuerdo que terminó el conflicto y se formula como reunificación con un Estado existente. El Acuerdo de Belfast reconoce el derecho de sus habitantes a identificarse y ser aceptados como británicos, irlandeses o ambos, y establece que el estatus sólo cambia por consentimiento mayoritario. Esa doble garantía protege la aspiración nacionalista y la pertenencia unionista. Cualquier campaña que trate a una comunidad como vencida contradice el espíritu del arreglo.

La ley dispone que el secretario de Estado convoque una consulta si parece probable una mayoría por la unidad. No define un algoritmo. Una evaluación responsable miraría encuestas repetidas, elecciones, transferencias de voto, demografía y acontecimientos, pero ninguna variable aislada basta. La pluralidad católica en el censo de 2021 no equivale a mayoría nacionalista: existen católicos unionistas o indecisos, protestantes favorables a la unidad y un grupo creciente sin religión. Identidad, confesión y preferencia constitucional se correlacionan sin coincidir.

La encuesta Northern Ireland Life and Times 2025 preguntó cómo se votaría si se celebrara un referéndum: 36 % eligió sí a la reunificación, 45 % no y 9 % no sabía. Ese resultado no activa automáticamente el deber legal y puede cambiar según el modelo presentado. Encuestas que describen servicios, tributación o pertenencia europea obtienen respuestas diferentes. El dato útil es que la unidad constituye una opción sustantiva, todavía sin ventaja clara en esa serie.

El Ejecutivo funciona por poder compartido. Primera ministra y viceprimera ministra tienen autoridad conjunta y dependen de designaciones de los principales bloques. La presencia de Michelle O'Neill como primera ministra simboliza el cambio electoral, pero no convierte el gobierno en una administración nacionalista. Sus responsabilidades inmediatas son presupuesto, salud, educación y economía dentro del Reino Unido. Cuando la institución colapsa, como ocurrió en períodos recientes, la frustración puede alimentar tanto demandas de reforma como rechazo a cualquier gran cambio.

Preparar una consulta requeriría acordar la pregunta, franquicia, regulación de campaña, umbral ordinario y calendario de la votación correspondiente en la República. El Acuerdo indica que ambos gobiernos deben dar efecto a una decisión por la unidad, pero no detalla el nuevo modelo constitucional. Dublín podría extender su Constitución y sus instituciones, crear arreglos transitorios para el Norte o negociar una república más federal. Cada alternativa distribuye poder, símbolos y costos de modo distinto.

Los derechos unionistas deben definirse antes de pedir confianza. La ciudadanía británica podría conservarse; la cultura y las órdenes fraternales necesitarían protección; la policía y la justicia deberían mantener legitimidad cruzada; y las conexiones con Gran Bretaña podrían continuar mediante el Common Travel Area. Para los nacionalistas, la igualdad exige que la amenaza de violencia no otorgue veto. Para unionistas, consentimiento significa que una mayoría estrecha no autoriza a borrar su identidad. La estabilidad requiere instituciones donde perder el estatus no signifique perder la patria cotidiana.

El intervalo legal mínimo de siete años entre consultas fallidas evita repetición inmediata, pero no resuelve una votación estrecha. Una campaña sin plan puede ganar por emoción y perder la paz en la implementación. Un proceso deliberativo previo, documentos conjuntos de Londres y Dublín y una asamblea ciudadana podrían establecer opciones verificables. La preparación no debe convertirse en propaganda estatal ni en pretexto para postergar indefinidamente la posibilidad prevista en el acuerdo.

Variable	Qué muestra	Qué no muestra
Religión censal	Composición y cambio social	Voto constitucional individual
Identidad nacional	Pertenencias británica, irlandesa y norirlandesa	Preferencia definitiva bajo un plan concreto
Voto partidario	Representación y prioridades múltiples	Resultado de una pregunta binaria
Encuesta de border poll	Preferencia bajo una pregunta y fecha	Activación automática del deber legal

La tabla resume una cautela central: ninguna variable social reemplaza la pregunta constitucional. Religión, identidad y voto partidario ayudan a explicar el terreno político, pero el deber legal depende de una evaluación prospectiva y el resultado sólo existe cuando la ciudadanía responde a una propuesta concreta.

Una decisión defendible debería publicar el conjunto de indicadores considerado por el secretario de Estado y explicar por qué muestran, o todavía no muestran, una mayoría probable. La transparencia no elimina la discreción prevista por la ley; permite controlarla sin fingir que un único porcentaje contiene toda la sociedad norirlandesa.

CAPÍTULO XII | IRLANDA DEL NORTE: COMERCIO, MAR DE IRLANDA Y SERVICIOS

1. Economía del doble acceso

La economía norirlandesa se encuentra en la intersección de dos mercados. El Marco de Windsor mantiene reglas europeas relevantes para mercancías y establece procedimientos diferenciados para movimientos desde Gran Bretaña. Esto evita una frontera física en la isla y protege el Acuerdo de Belfast, pero introduce documentación y controles en puertos. Para el unionismo, esa frontera regulatoria interna cuestiona la igualdad dentro del Reino Unido; para empresas orientadas al sur y a la UE, el doble acceso puede ser ventaja.

En la primera mitad de 2025, el informe independiente de monitoreo indicó que 96 % del valor del transporte de carga relevante utilizó el sistema de mercado interno. La cifra muestra alcance de las simplificaciones, no ausencia de fricción: empresas deben registrarse, clasificar rutas y cumplir condiciones. El sistema funciona mejor cuanto mayor es la confianza entre Londres, Belfast, Dublín y Bruselas. Una disputa política que suspenda la cooperación puede elevar costos sin cambiar el texto formal.

NISRA calculó ventas totales de empresas de £109.262 millones en 2024. £69.501 millones fueron ventas dentro de Irlanda del Norte, £20.147 millones a Gran Bretaña y £19.614 millones exportaciones; dentro de estas últimas, Irlanda fue el mayor destino individual con £10.452 millones. Las importaciones internacionales sumaron £11.187 millones. Las cifras muestran dos dependencias: Gran Bretaña sigue siendo un mercado esencial y la República es el socio exterior dominante.

La reunificación cambiaría la naturaleza de cada vínculo. El comercio norte-sur pasaría a ser interno de la UE y probablemente se simplificaría; el movimiento con Gran Bretaña se convertiría en comercio exterior europeo, con controles semejantes a los actuales pero de alcance potencialmente mayor. Si la economía ya desarrolló cadenas en la isla, el ajuste sería menor en algunos sectores. Si las empresas dependen de proveedores y clientes británicos, la nueva frontera pesaría. Un acuerdo UE-Reino Unido más estrecho reduciría el costo para todos.

Los servicios públicos plantean una transición más compleja que las mercancías. Irlanda y el Reino Unido tienen sistemas distintos de salud, beneficios, educación, impuestos y pensiones. La integración puede aprovechar la escala y elevar la inversión, pero la equiparación de salarios, prestaciones y elegibilidad cuesta dinero. Las listas de espera y la capacidad hospitalaria no se corrigen con un cambio de bandera. El plan

debe definir qué sistema se extiende, durante cuánto tiempo conviven ambos y cómo se protege a pacientes y trabajadores.

La producción norirlandesa creció 0,7 % trimestral y 3,6 % interanual en el primer trimestre de 2026 según el panorama de NISRA; en 2025 existían 81.135 empresas. Esa base permite la adaptación, aunque predominan las firmas pequeñas. La incertidumbre prolongada puede congelar inversiones. Publicar rutas de transición, garantías de propiedad y acuerdos de reconocimiento profesional disminuiría el riesgo, incluso para quienes prefieren el statu quo.

La principal oportunidad económica de Irlanda del Norte es convertir su geografía en puente. Dentro del Reino Unido, eso requiere que Windsor sea previsible y que el Ejecutivo venda el acceso dual. Dentro de una Irlanda unida, requeriría proteger acceso británico y usar fondos europeos e irlandeses para infraestructura. En ambos modelos, la cooperación produce más valor que la soberanía entendida como separación absoluta.

CAPÍTULO XIII | LA REPÚBLICA DE IRLANDA ANTE LA REUNIFICACIÓN

1. El quinto actor

La República de Irlanda no recibiría pasivamente a Irlanda del Norte. Su electorado debe consentir el cambio y su Estado tendría que financiar, administrar y legitimar la integración. ***La cláusula europea acordada en 2017 prevé que, si la isla se unifica conforme al Acuerdo de Belfast, todo el territorio pertenecería a la Unión Europea.*** Esa ventaja jurídica no resuelve el modelo interno. Dublín debe decidir si ofrece extensión de la república actual, una nueva Constitución compartida o arreglos transitorios con fuerte autonomía del Norte.

El Shared Island Initiative ha financiado infraestructura y más de cuarenta investigaciones sobre economía, salud, educación, clima y sociedad. Ese enfoque gradual reduce la distancia funcional sin predeterminedar un referéndum. Estudios del ESRI comparan productividad, costo de vida, servicios y estructuras fiscales. La economía irlandesa tiene mayor ingreso por algunos indicadores, pero el PIB está distorsionado por multinacionales; los hogares norirlandeses reciben servicios y transferencias que no se capturan comparando salarios brutos.

El costo fiscal es el punto más controvertido. Un informe de IIEA calculó escenarios anuales de aproximadamente €8.000 a €20.000 millones sobre datos de 2019, según si Dublín asume la subvention, pensiones y convergencia de prestaciones. Un contraanálisis de John Doyle sostiene que el déficit heredado sería mucho menor, £1.300–£1.500 millones si Londres continúa pagando pensiones estatales adquiridas, o £4.700–£4.800 millones si no lo hace. Otro modelo de DCU y Ulster University estimó €3.000 millones en el primer año y equilibrio en nueve años bajo crecimiento inducido.

Las cifras no se contradicen sólo por ideología: responden a preguntas distintas. ¿Continúa el Tesoro británico pagando pensiones por contribuciones previas? ¿Se atribuyen defensa y deuda al Norte? ¿Los beneficios convergen inmediatamente al nivel irlandés? ¿La productividad aumenta después de la inversión? ¿La Unión Europea contribuye fondos? Cambiar cada supuesto mueve miles de millones. Un informe responsable presenta la matriz y evita escoger el resultado que coincide con su preferencia.

La capacidad fiscal irlandesa es mayor que hace veinte años, pero los ingresos corporativos son volátiles y el país enfrenta vivienda, salud e infraestructura. Un fondo de reunificación podría acumular recursos y financiar proyectos útiles aun sin cambio de estatus. La contribución británica transitoria sería materia de negociación, no obligación evidente. Londres puede argumentar que sus pagos terminan con la soberanía; Dublín puede responder que pensiones y transición ordenada protegen obligaciones existentes y estabilidad regional.

La integración humana exige símbolos y poder. Cambiar bandera o himno, reformar el Senado, ubicar instituciones en Belfast y reconocer ceremonias británicas pueden parecer secundarios frente al presupuesto, pero afectan si unionistas perciben el nuevo Estado como propio. La ciudadanía británica debe seguir siendo práctica: pasaporte, transmisión, educación y vínculos culturales. El Acuerdo ya normalizó identidad dual; una Irlanda unida debería ampliar ese principio, no reducirlo a tolerancia privada.

La República también asumiría responsabilidades de seguridad y memoria. La policía, la justicia y la cooperación con el Reino Unido enfrentarían grupos disidentes y crimen organizado. Verdad, víctimas y legado no desaparecen con la frontera. Un proceso bien preparado podría consolidar la paz y profundizar la relación británico-irlandesa; uno triunfalista reactivaría miedos. La reunificación viable es un proyecto de Estado compartido, no sólo anexión territorial.

Estimación	Rango o resultado	Supuesto decisivo
IIEA 2024	aprox. €8–20 mil millones anuales	Armonización, pensiones y atribución de gasto, base 2019
Doyle 2024	£1,3–1,5 mil M; o £4,7–4,8 mil M	Continuidad o no de pensiones pagadas por Londres
DCU/UU 2025	€3 mil M en año uno; equilibrio en 9 años	Crecimiento e inversión según el modelo

2. Por qué los modelos económicos divergen

El término subvention reúne conceptos que no necesariamente acompañan al territorio. Parte del gasto británico se ejecuta en Irlanda del Norte; otra parte es una imputación de servicios nacionales, deuda o defensa. Una Irlanda unida necesitaría financiar los primeros y puede elegir un nivel diferente para los segundos. ***Las pensiones son el componente más sensible porque representan derechos acumulados bajo contribuciones británicas y pueden seguir pagándose a residentes en el extranjero. La negociación sobre ese punto cambia el saldo inicial más que muchas políticas menores.***

La convergencia también puede ser inmediata o gradual. Igualar desde el primer año salarios públicos, prestaciones, salud e inversión al nivel irlandés produce un costo elevado y un salto de ingreso. Mantener sistemas paralelos reduce el primer presupuesto y prolonga las desigualdades. Los modelos de crecimiento suponen que inversión, mercado único y reformas elevan la productividad; este efecto puede tardar o no materializarse. La prudencia fiscal exige financiar la transición aún si la ganancia optimista llega después.

Por esa razón, el informe no publica una cifra de “precio de la unidad” como si fuera una factura. Presenta un intervalo condicionado y pide un presupuesto conjunto antes de la consulta: base estadística común, tratamiento de pensiones, cronograma de servicios, contribución británica, fondos europeos y prueba de estrés sin crecimiento adicional. La ciudadanía puede entonces decidir entre riesgos explícitos, y no entre un costo máximo usado para asustar y un dividendo máximo usado para persuadir.

CAPÍTULO XIV | BREXIT: ACELERADOR CONSTITUCIONAL Y COSTO DE FRONTERA

1. Integración europea

El referéndum de 2016 produjo una mayoría británica de salida y cuatro resultados territoriales diferentes. Escocia votó 62,0 % por permanecer; Irlanda del Norte 55,8 %; Inglaterra y Gales votaron por salir. La decisión era del electorado del Reino Unido como unidad, por lo que no existía veto territorial. Políticamente, demostró que la soberanía británica podía imponerse a mayorías territoriales en una competencia reservada. Para los nacionalistas, transformó la independencia en vía de regreso a la UE. Para el unionismo, confirmó que las decisiones comunes deben valer en todo el Estado.

El efecto económico se evalúa contra un contrafactual. La Office for Budget Responsibility mantiene el supuesto de que la relación comercial posterior reducirá a largo plazo la productividad alrededor de 4 % y la intensidad comercial 15 % frente a permanecer en la UE. No significa que el PIB sea 4 % menor que antes de 2016; significa que sería aproximadamente 4 % menor que en un escenario hipotético de permanencia. El dato es británico y no distribuye el impacto entre naciones.

En 2025 el Reino Unido exportó £384.000 millones a la UE, 41 % del total, e importó £472.000 millones, 50 %. La magnitud explica por qué una Escocia o Gales europeo preferiría acceso al bloque. También explica el costo de poner el principal mercado interno de cada uno detrás del arancel exterior de la UE. El proyecto independentista cambia una frontera económica por otra: reduce fricción con veintisiete países y la aumenta con el vecino más integrado.

Irlanda del Norte obtuvo una configuración distinta porque una frontera terrestre amenazaba el acuerdo de paz. El Protocolo y luego Windsor trasladaron parte de la fiscalización al mar de Irlanda. Esa solución aumenta el argumento nacionalista de que la economía puede integrarse gradualmente con el sur, y el argumento unionista de que Brexit debilitó la unión. La misma institución puede leerse como puente o separación, según cuál pertenencia se considera primaria.

Brexit también enseñó lecciones de proceso. Una campaña binaria puede ganar sin consenso sobre la relación futura; activar una salida antes de fijar destino reduce poder negociador; promesas de ausencia de fricción chocan con la lógica jurídica de mercados distintos; y la incertidumbre institucional dura años. Un referéndum territorial debería especificar moneda, relación comercial y secuencia de negociación con más claridad, aunque ningún acuerdo pueda estar firmado antes del voto.

La política europea puede cambiar antes de una independencia. Un pacto sanitario, unión aduanera parcial, movilidad juvenil o alineación regulatoria británica reducirían la dureza de las futuras fronteras. A la inversa, mayor divergencia británica aumentaría el atractivo europeo y el costo de separación simultáneamente. Por eso las evaluaciones deben actualizarse: el Brexit de 2026 no es una estructura terminada y la frontera de 2032 puede operar bajo reglas distintas.

Referéndum de la Unión Europea, 2016

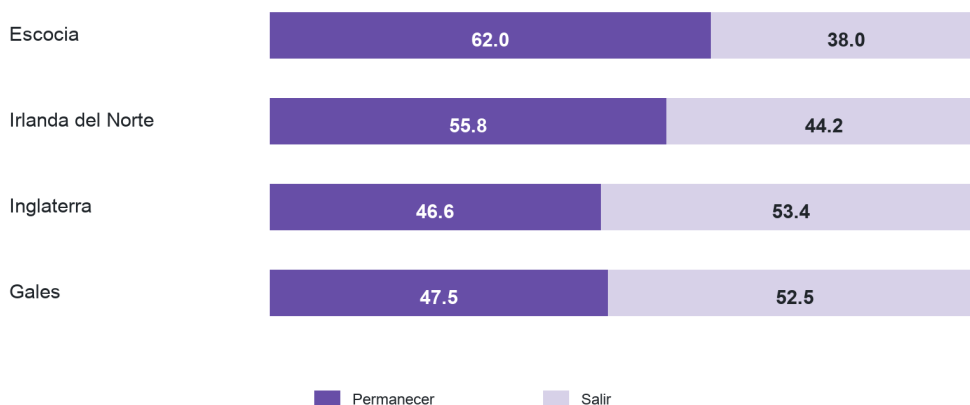


Figura 3. Cuatro electorados dentro de una decisión británica

Fuente: Electoral Commission, EU referendum results, 2016. Porcentajes redondeados del voto válido.

CAPÍTULO XV | FRONTERAS, CIUDADANÍA Y VIDA COTIDIANA

1. Personas antes que aduanas

Una frontera política cumple funciones distintas: controla mercancías, regula personas, delimita impuestos y define jurisdicción. Es posible eliminar una de esas fricciones y mantener otra. **El Common Travel Area permite a ciudadanos británicos e irlandeses residir, trabajar, votar en determinadas elecciones y acceder a servicios en ambos Estados, aunque Irlanda esté en la UE y el Reino Unido no.** Ese arreglo demuestra que una frontera internacional puede ser abierta para personas y controlada para bienes. También exige cooperación, intercambio de información y reglas de elegibilidad.

Escocia y Gales podrían solicitar su incorporación a un área de viaje ampliada. Londres y Dublín tendrían razones prácticas para aceptarlo: millones de ciudadanos compartirían familias, empleo y pensiones. Sin embargo, **el CTA no es un régimen de Schengen ni otorga automáticamente derechos a nacionales de terceros países. Si Escocia aplicara una política migratoria más abierta, Inglaterra podría intensificar controles en empleadores, transporte o puntos interiores para evitar movimientos secundarios.** La promesa de “frontera invisible” necesita explicar ese mecanismo.

Para mercancías, la pertenencia a la UE es decisiva. Un Estado miembro aplica el código aduanero, controles sanitarios y política comercial común. Si Inglaterra y Gales quedaran en regímenes distintos,

puertos, carreteras y centros logísticos tendrían que presentar declaraciones. No todos los envíos se inspeccionan físicamente; el costo proviene también de clasificación, garantía, demora y reglas de origen. Las empresas pequeñas enfrentan proporcionalmente más carga y pueden abandonar mercados de bajo volumen.

La ciudadanía distribuye pertenencia y derechos. Una ley escocesa o galesa debería definir adquisición por nacimiento, ascendencia y residencia. Londres decidiría si conserva ciudadanía británica a quienes adquieren la nueva; la tradición británica permite doble nacionalidad, pero el Parlamento podría legislar condiciones. Irlanda del Norte ya tiene la garantía de ciudadanía británica, irlandesa o ambas. Alterarla socavaría el acuerdo. La regla más estable es maximizar continuidad y permitir elección, evitando una masa de residentes con estatus incierto.

Las pensiones contributivas ilustran la necesidad de registros. Personas trabajaron en varias naciones bajo un sistema único; separar contribuciones históricas por residencia final sería arbitrario. Los acuerdos internacionales suelen sumar períodos y distribuir pagos, como ocurre en la coordinación europea. El tratado de separación debe asignar responsabilidad por derechos acumulados y mecanismos de actualización. La discusión sobre “quién paga” no puede resolverse después de que los pensionistas descubran una brecha.

Salud, educación y reconocimiento profesional también cruzan fronteras. Comunidades galesas usan hospitales ingleses; estudiantes escoceses y británicos pagan aranceles distintos; trabajadores regulados se mueven entre jurisdicciones. La independencia convierte decisiones administrativas en acuerdos internacionales. Eso no obliga a cerrar sistemas: se pueden comprar servicios, reconocer títulos y coordinar emergencias. Pero cada arreglo tiene costo, gobernanza y procedimiento de disputa.

La prueba práctica de una separación ordenada es el lunes posterior. ¿Se paga el salario en la misma cuenta? ¿Cruza un camión con la documentación correcta? ¿Puede una enfermera mantener su registro? ¿Sigue válido el pasaporte? Responder esas preguntas antes de los símbolos reduce incertidumbre y demuestra capacidad estatal. En una unión de siglos, la soberanía se juzga por continuidad de vida cotidiana.

CAPÍTULO XVI | EL CAMINO A LA UNIÓN EUROPEA

1. Adhesión y fronteras regulatorias

Una Escocia o Gales independiente no heredaría automáticamente la membresía británica perdida. ***El artículo 49 del Tratado de la Unión Europea permite solicitar adhesión a cualquier Estado europeo que respete sus valores. La candidatura requiere opinión de la Comisión, unanimidad de los Estados miembros, negociación del acervo, consentimiento del Parlamento Europeo y ratificaciones nacionales.*** La historia europea y la previa aplicación de normas pueden acelerar preparación técnica; no eliminan el procedimiento político.

Los criterios económicos exigen una economía de mercado funcional y capacidad de enfrentar competencia. Los criterios políticos abarcan democracia, Estado de derecho, derechos y minorías. El Estado debe adoptar instituciones capaces de aplicar el acervo. Escocia parte de una administración avanzada y de décadas de aplicación europea; Gales también. Pero ambos tendrían que construir aduanas, control de fronteras, autoridad monetaria y reguladores nacionales mientras negocian. La Comisión evalúa capacidad real, no memoria histórica.

La cuestión fiscal y monetaria sería sensible. No existe una cifra única de déficit que bloquee la candidatura, aunque el Pacto de Estabilidad usa referencias de 3 % del PIB para déficit y 60 % para deuda. Un país puede ingresar con desequilibrios si presenta instituciones y trayectoria creíble, pero un déficit inicial de dos dígitos complicaría la negociación y el acceso a mercados. La obligación de comprometerse con el euro no significa adopción inmediata; requiere convergencia y participación institucional que puede tomar años.

España y otros Estados suelen presentarse como veto automático por temor a separatismos propios. La posición real dependería de si la independencia fue constitucional y acordada. Un proceso consentido por Londres reduce el incentivo a bloquear; una secesión unilateral elevaría objeciones sobre reconocimiento y precedente. La UE favorece estabilidad, fronteras claras y resolución conforme al orden constitucional. No

hay garantía política, pero tampoco una regla que excluya a nuevos Estados surgidos de un miembro anterior.

Irlanda del Norte tiene una situación distinta. La declaración del Consejo Europeo de 2017 reconoció que una Irlanda unida conforme al Acuerdo de Belfast quedaría dentro de la UE como parte de Irlanda, siguiendo la lógica de la reunificación alemana. No habría una candidatura separada del Norte. Sí habría transición para aplicar plenamente normas, fondos, IVA, agricultura y representación en un territorio que llevaba años fuera de algunas políticas.

El presupuesto europeo produciría contribuciones y beneficios. Regiones de menor ingreso podrían recibir cohesión y fondos agrícolas; universidades accederían a programas; empresas ganarían pasaporte regulatorio en algunos sectores. A cambio, los nuevos Estados aportarían al presupuesto, aplicarían política comercial común y aceptarían jurisdicción europea. La adhesión es un paquete de soberanía compartida, no recuperación absoluta de control.

La secuencia es crítica. Antes de ser miembros, Escocia o Gales estarían fuera tanto del Reino Unido como de la UE, salvo acuerdo transitorio. Negociar desde antes del día de independencia puede reducir el intervalo, pero la UE sólo concluye un tratado con un Estado y necesita certeza sobre fronteras y obligaciones. Un período de asociación al Espacio Económico Europeo ha sido sugerido, aunque también requiere consentimiento y no cubre agricultura o unión aduanera. Cada puente tiene instituciones propias.

Tema	Escocia/Gales	Irlanda del Norte reunificada
Base jurídica	Solicitud bajo artículo 49	Territorio de un Estado miembro existente
Decisión	Unanimidad, Parlamento Europeo y ratificaciones	Acuerdo de Belfast, votos y legislación irlandesa/británica
Moneda	Compromiso futuro con el euro; no necesariamente inmediato	Uso del euro al integrarse en Irlanda
Frontera con Gran Bretaña	Frontera exterior de la UE salvo acuerdo	Mar de Irlanda como frontera comercial principal

Las rutas europeas son jurídicamente diferentes. ***Escocia y Gales necesitarían convertirse primero en Estados reconocidos y luego completar una adhesión; Irlanda del Norte cambiaría de soberanía dentro de un Estado que ya es miembro. La diferencia puede ahorrar años de negociación exterior, pero no evita la transición administrativa dentro de la isla.***

Para el electorado, la pregunta europea debe formularse junto con la frontera británica. El acceso futuro al mercado único es un activo, mientras el comercio con Inglaterra y Gran Bretaña concentra buena parte de las relaciones actuales. El resultado económico dependerá del acuerdo que una cada nuevo Estado con ambos espacios.

CAPÍTULO XVII | LA CORONA DESPUÉS DEL REINO UNIDO

1. Monarquía y continuidad

La disolución territorial no termina automáticamente la monarquía. Carlos III es rey del Reino Unido y, mediante títulos jurídicamente separados, jefe de Estado de otros reinos de la Commonwealth. Canadá, Australia y Jamaica no son gobernados como dependencias británicas: cada Corona funciona bajo su propia constitución y consejo ministerial. Una Escocia independiente podría reproducir ese modelo, de modo que la misma persona fuese rey de Escocia y rey del Estado británico restante.

El Gobierno escocés propone conservar al monarca mientras la ciudadanía no decida otra cosa. Sería necesaria legislación escocesa sobre título, sucesión, regencia, juramento, financiación y representación

mediante un gobernador general o funciones equivalentes. El rey actuaría en asuntos escoceses siguiendo consejo de ministros escoceses. No sería “rey desde Londres” en sentido constitucional, aunque su persona y familia fueran comunes. Cualquier choque de consejos se gestionaría separando capacidades jurídicas.

El juramento de coronación contiene compromisos con leyes y religiones de los reinos. La independencia exigiría adaptar el texto y aclarar la relación con la Iglesia de Escocia, que no es una iglesia estatal equivalente a la de Inglaterra. ***La Corona de Escocia tiene historia propia, pero la institución moderna se definiría por una nueva Constitución.*** Los símbolos pueden ofrecer continuidad o convertirse en un segundo referéndum. Posponer la república reduce decisiones simultáneas; también puede frustrar a independentistas republicanos.

Gales enfrenta otro punto de partida. Está integrado a la Corona inglesa desde la época Tudor y el título de príncipe de Gales no crea una corona galesa. Un Estado independiente podría reconocer al mismo rey mediante ley propia, elegir presidencia parlamentaria o celebrar una consulta. No hay automatismo histórico que obligue a ninguna opción. ***Mantener la monarquía puede tranquilizar a unionistas y separar soberanía de identidad; una república puede simbolizar ruptura y requerir diseño institucional adicional.***

En una Irlanda unida, la Constitución de Irlanda mantendría una presidencia republicana salvo reforma. Carlos III podría continuar como rey del Reino Unido restante y de otros reinos, mientras ciudadanos británicos del Norte conservan su nacionalidad. La protección de símbolos unionistas no exige un segundo jefe de Estado, pero pueden negociarse ceremonias, banderas locales y reconocimiento cultural. La visita de la monarquía a Irlanda ya mostró capacidad de reconciliación simbólica sin autoridad constitucional.

Si sólo Inglaterra permaneciera, el monarca podría ser rey de Inglaterra bajo una ley de continuidad, pero el nombre del Estado y la unión con Irlanda del Norte, si persistiera, afectarían el título. La sucesión se coordina informalmente entre reinos para evitar monarcas distintos; nuevos reinos tendrían que acordar cambios futuros. Esa coordinación limita la autonomía de cada parlamento, como ya ocurre en la Commonwealth, y demuestra que ***compartir Corona es una forma de interdependencia.***

La Commonwealth no depende de que todos sus miembros reconozcan al rey. Su papel de Head of the Commonwealth es simbólico y distinto de la jefatura estatal; la organización incluye repúblicas y monarquías propias. Una Escocia, Gales o incluso un Estado británico reformado podrían pertenecer simultáneamente. La continuidad se decide por criterios de membresía y consenso, no por herencia automática.

RESPUESTA DIRECTA

La independencia de Escocia no obligaría al rey a dejar de ser rey de Escocia. Con legislación acordada, ejercería una Corona escocesa separada y actuaría bajo consejo escocés. La monarquía terminaría allí sólo si la Constitución o un referéndum posterior adoptaran una república.

CAPÍTULO XVIII | EL SISTEMA NUCLEAR BRITÁNICO EN ESCOCIA

1. Faslane y Coulport

La disuasión nuclear británica se apoya en cuatro submarinos de la clase Vanguard, en proceso de reemplazo por Dreadnought, armados con misiles Trident II D5. Los submarinos tienen base en HM Naval Base Clyde, cuya principal instalación operativa es Faslane. Las cabezas se almacenan y manipulan en Royal Naval Armaments Depot Coulport, al otro lado de Gare Loch y Loch Long. Desde 1969 el Reino Unido sostiene al menos un submarino en patrulla, política conocida como Continuous at Sea Deterrence.

El sistema combina soberanía nacional e interdependencia con Estados Unidos. Los misiles se extraen de un pool común mantenido en Kings Bay, Georgia; el Reino Unido diseña y fabrica su cabeza Mk4A y controla decisión, tripulación y mando. La actualización de 2026 de la Defence Nuclear Enterprise anunció £8.400 millones para la siguiente etapa de Dreadnought y £15.000 millones para el programa de cabezas entre 2025/26 y 2029/30. El programa Astraea prepara la nueva cabeza. Estas cifras pertenecen a modernización nacional, no a un traslado.

Faslane proporciona muelles, mando, mantenimiento, entrenamiento, seguridad, alojamiento y acceso a aguas profundas. Coulport es más difícil de replicar: almacenes separados, zonas de exclusión, seguridad

contra explosivos, embarcadero protegido y equipos para acoplar o retirar cabezas. Devonport, en Plymouth, realiza mantenimiento profundo de submarinos sin armas y tiene infraestructura naval, pero no sustituye automáticamente el conjunto Clyde–Coulport. La alternativa requiere por lo menos una base y un depósito especializado, posiblemente en sitios distintos.

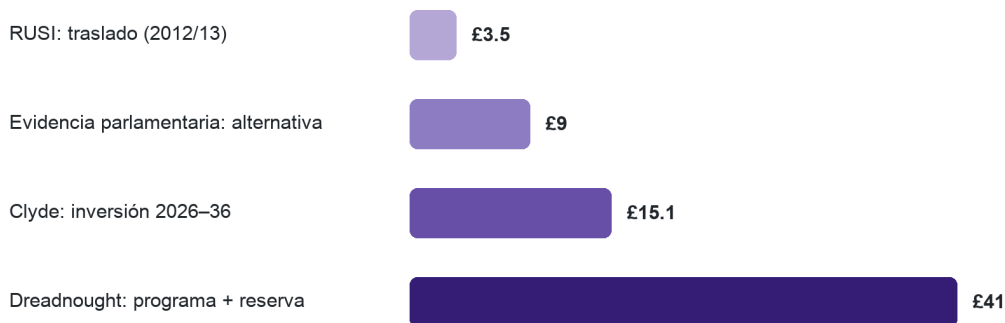
La geografía escocesa ofrece aguas profundas, baja densidad relativa y acceso al Atlántico. Ningún lugar en Inglaterra combina sin modificaciones las mismas condiciones. Los posibles sitios estudiados enfrentan población cercana, navegación comercial, disponibilidad de terreno y resistencia local. La regulación nuclear, la seguridad y la planificación no son trámites que el gobierno pueda ignorar sin aumentar riesgos. Incluso una legislación de emergencia no construye muelles, carreteras o depósitos.

El Ministerio de Defensa anunció en julio de 2026 £26.000 millones para transformar tres bases navales durante diez años, de los cuales £15.100 millones corresponden a Clyde. Más de 6.500 militares y civiles trabajan allí. Esa inversión refuerza la dependencia física y laboral de Escocia justo cuando la controversia soberana aumenta. No es una tasación de la base ni el costo de reemplazarla: moderniza la ubicación existente para décadas de operación.

La clase Dreadnought tiene un costo estimado de £31.000 millones más una reserva de contingencia de £10.000 millones. La Cámara de los Comunes indicó que el equipo de la empresa nuclear de defensa hasta 2033 alcanzaba un pronóstico de £128.000 millones. Estos totales sitúan el traslado dentro de un sistema ya sometido a presión presupuestaria y de capacidad. Una mudanza simultánea competiría por ingenieros, materiales, regulación y atención gerencial con submarinos, cabezas y mantenimiento.

Escocia no obtendría las armas por encontrarse en su territorio. Personal, mando, códigos, cabezas y submarinos pertenecen al Estado británico. Una declaración de independencia debería reconocer custodia británica durante el retiro, protección de información y acceso seguro. Interferir físicamente generaría una crisis internacional; permitir presencia indefinida contradiría la política antinuclear escocesa. La negociación debe convertir esa incompatibilidad en calendario técnico.

Cifras nucleares citadas en el debate (£ miles de millones)



No son presupuestos comparables: cambian fecha, alcance y naturaleza del gasto.

Figura 4. Magnitudes que suelen mezclarse en el debate nuclear

Fuentes: RUSI; comités de la Cámara de los Comunes; Ministerio de Defensa; Commons Library. Los valores tienen precios, fechas y alcances diferentes.

CAPÍTULO XIX | TRASLADAR TRIDENT: COSTO, TIEMPO Y PODER DE NEGOCIACIÓN

1. Escenarios nucleares

No existe en 2026 una decisión de trasladar el arsenal, un lugar inglés aprobado ni un presupuesto oficial. La mejor estimación técnica pública sigue siendo el estudio de RUSI de 2014. Propuso adaptar Devonport para submarinos y construir un nuevo equivalente de Coulport, posiblemente cerca de Falmouth. Calculó £3.000–£4.000 millones a precios de 2012/13, más una suma importante no incluida para adquirir y despejar

terreno. Por inflación, exigencias y alcance, no es responsable convertir ese rango directamente en un precio actual mediante un índice general.

La evidencia parlamentaria exhibió una dispersión mucho mayor. Un documento calculó £8.000–£10.000 millones para una alternativa inglesa; otros testimonios hablaron desde varios miles de millones hasta £50.000 millones. Los extremos suelen incorporar elementos distintos: compensación local, infraestructura, descontaminación, continuidad de patrulla, o incluso partes del programa nuclear. La amplitud no demuestra que cualquier cifra sea igualmente válida; demuestra que falta diseño. El primer presupuesto creíble sólo surgiría después de seleccionar sitio, estudiar geología, seguridad y planificación.

Los plazos son estratégicos. RUSI estimó que Devonport podría estar listo dentro de una década y un nuevo Coulport entre diez y quince años desde la identificación. El Comité de Asuntos Escoceses escuchó diez a veinte años o más. El gobierno escocés desea retirar las armas “de manera segura y rápida”, pero rápido puede significar dos cosas: sacar cabezas y detener operaciones, o mantener la disuasión hasta completar una base. El primer objetivo puede cumplirse antes a costa de interrumpir la patrulla; el segundo necesita larga transición.

Ese desajuste genera poder negociador. Londres valora el tiempo porque la alternativa no existe; Edimburgo controla territorio y permisos después de la independencia. Escocia podría ofrecer arrendamiento transitorio de Faslane y Coulport a cambio de renta, empleos, reparto favorable de deuda, activos militares, pensiones o cooperación. El Estado británico restante podría vincular acceso a reconocimiento, moneda, comercio o pasivos. Ninguna palanca es absoluta: Escocia necesita un acuerdo general y Londres no puede mantener indefinidamente armamento contra la voluntad soberana del territorio anfitrión.

Un enclave soberano británico sería jurídicamente imaginable y políticamente tóxico. Requeriría carretera, aguas, espacio aéreo, policía, emergencias y una frontera alrededor de instalaciones nucleares. Una base arrendada, como otras instalaciones militares extranjeras, preservaría soberanía escocesa formal, pero chocaría con la promesa de desarme territorial y con criterios de ingreso a la OTAN que Escocia querría aclarar. ***La solución más probable es una presencia temporal con fecha, hitos y compensación, no cesión perpetua.***

Las alternativas exteriores son limitadas. Compartir temporalmente infraestructura estadounidense o francesa exigiría consentimiento, compatibilidad y cambios de política; además, trasladar submarinos al exterior debilitaría la narrativa de disuasión nacional independiente. Operar sin Coulport durante años requeriría nuevas prácticas de seguridad. El desarme británico completo resolvería la ubicación, pero contradice la política de los principales partidos, el programa Dreadnought y la postura estratégica de 2025–26.

Para Escocia, prolongar el arrendamiento tiene beneficios locales y costos políticos. HMNB Clyde concentra más de 6.500 puestos; proveedores, vivienda y municipios dependen de la actividad. Una base naval escocesa convencional conservaría parte del empleo, no las funciones especializadas de Coulport ni toda la escala. Una transición laboral debería financiar formación, descontaminación y usos alternativos. Amenazar con expulsión inmediata puede aumentar la presión sobre Londres y reducir el valor económico que Escocia podría negociar.

Para Inglaterra, construir la base trasladaría inversión y empleos junto con riesgo y oposición. El sitio anfitrión exigiría vivienda, carreteras, escuelas, compensación y planes de emergencia. La política de planificación puede ser más lenta que la ingeniería. Un costo de £10.000 o £20.000 millones sería asumible dentro del programa nuclear total, pero un retraso que interrumpa la patrulla afecta doctrina y alianzas. Por eso el tiempo, más que el precio nominal, es el activo escocés principal.

Escenario	Tiempo plausible	Costo público disponible	Consecuencia estratégica
Arrendamiento transitorio	5–20 años, negociado	Renta y operación; sin estimación oficial	Mantiene patrulla y maximiza palanca escocesa

Devonport + nuevo Coulport	10–15 años o más	£3–4 mil M a precios 2012/13, más terreno	Preserva sistema en territorio británico restante
Retiro acelerado	Años, según almacenamiento	Desconocido	Puede interrumpir disuasión continua
Desarme	Depende de decisión política y desmantelamiento	Ahorra parte de renovación; crea costos de salida	Cambia doctrina, OTAN y relación con EE. UU.

EL ARMA DE NEGOCIACIÓN

La palanca de Escocia no es el control de los misiles: es el control soberano del único territorio británico preparado para operarlos. Su valor aumenta con la falta de alternativa y disminuye si Edimburgo exige una salida tan inmediata que no puede intercambiar tiempo por concesiones.

CAPÍTULO XX | DEFENSA CONVENCIONAL, OTAN E INTELIGENCIA

1. Seguridad

Una separación escocesa dividiría fuerzas que hoy reclutan y operan a escala británica. El tratado tendría que asignar personal, bases, buques, aeronaves, vehículos, inventarios y contratos. No existe una fórmula obligatoria: puede usarse población, localización, valor o necesidad. Los militares deben poder elegir servicio sin perder pensiones. La transferencia indiscriminada de unidades por ubicación ignoraría cadenas de mando y especialidades. Un período de cooperación evitaría brechas de vigilancia aérea y marítima.

El Gobierno escocés propone fuerzas propias, una base naval convencional en Faslane y solicitud de ingreso a la OTAN como Estado no nuclear. La adhesión exige unanimidad de los aliados y capacidad para contribuir a la defensa colectiva. La política antinuclear no impide la membresía: varios aliados no alojan armas. Pero Escocia tendría que aceptar el concepto estratégico nuclear de la alianza, proteger el tránsito y demostrar seguridad de información. La negociación de Trident influiría directamente en la confianza aliada.

La geografía da a Escocia valor en el Atlántico norte. Submarinos rusos, rutas marítimas, cables y espacio aéreo convierten vigilancia y guerra antisubmarina en prioridades. Un Estado pequeño puede especializarse y compartir radares, mando y entrenamiento con el Reino Unido y países nórdicos. La independencia no mueve las islas ni elimina amenazas comunes. Una ruptura hostil que interrumpa datos y patrullas perjudicaría a ambos gobiernos.

Gales tendría necesidades distintas: protección marítima, ciberseguridad, apoyo a la OTAN y continuidad de instalaciones. Su menor escala puede conducir a fuerzas reducidas y cooperación profunda. Una Irlanda unida integraría el Norte en un Estado militarmente neutral y no miembro de la OTAN, mientras el Reino Unido y muchos vecinos pertenecen a la alianza. Irlanda ya coopera con socios europeos, pero la ampliación territorial reabriría debate sobre neutralidad, defensa aérea y aguas del Atlántico.

La inteligencia es más difícil de dividir que un cuartel. MI5, MI6 y GCHQ conservan datos, fuentes y alianzas Five Eyes. Los nuevos Estados necesitarían controles de seguridad, legislación de interceptación y autoridades de supervisión antes de recibir información sensible. Londres tendría incentivos para cooperar contra terrorismo y crimen; también limitaría acceso durante una transición incierta. La ciudadanía dual y el movimiento abierto vuelven imposible una seguridad puramente nacional.

La continuidad internacional del Estado restante es probable por práctica: conservaría la mayor población, instituciones, obligaciones y capacidad. Su asiento permanente en el Consejo de Seguridad no se pierde automáticamente. Escocia, Gales y una Irlanda ampliada necesitarían reconocimiento y participación en organizaciones; la Irlanda existente ya mantiene sus membresías. La sucesión de tratados se negociaría caso por caso, con especial atención a derechos humanos, comercio, extradición y defensa.

El gasto debe distinguir capacidad de símbolo. ***Replicar todas las ramas militares y embajadas consume recursos que pueden compartirse; depender por completo de Londres contradice la promesa de soberanía.***

Un plan creíble identifica misiones, amenazas y alianzas, calcula personal y transición, y sólo después compra equipos. La defensa nuclear demuestra qué ocurre cuando la infraestructura precede a la política por décadas: las decisiones futuras quedan condicionadas por lugares y costos hundidos.

CAPÍTULO XXI | MIGRACIÓN, ASILO Y CAMBIO DEMOGRÁFICO

1. Movilidad

La migración neta de largo plazo del Reino Unido cayó a 171.000 en el año terminado en diciembre de 2025, desde 331.000 un año antes y un máximo provisional de 944.000 en el año a marzo de 2023. Hubo 813.000 inmigrantes y 642.000 emigrantes. El saldo de nacionales no UE fue +350.000, mientras los saldos de ciudadanos británicos y UE+ fueron negativos, -136.000 y -42.000. Estas cifras nacionales dominan el debate, pero las necesidades territoriales difieren.

Las proyecciones ONS asumían para 2026 saldos internacionales de 128.600 en Inglaterra, 4.400 en Escocia, 3.000 en Gales y 2.000 en Irlanda del Norte. No son cuotas ni resultados observados: son insumos demográficos. Muestran que Inglaterra concentra volumen mientras Escocia y Gales dependen de números pequeños para sostener población. Una política uniforme puede ser políticamente popular en el sudeste inglés y demográficamente restrictiva en regiones con escasez laboral.

La independencia permitiría a Escocia o Gales diseñar visas por ocupación, estudio o territorio. Puede atraer personal sanitario y estudiantes, pero el poder legal no garantiza llegada. Salarios, vivienda, clima, redes familiares y reconocimiento profesional influyen. Retener graduados exige empleo y residencia; distribuir inmigración requiere servicios y aceptación comunitaria. Las proyecciones de crecimiento basadas en migración deben incluir costos de infraestructura y no tratar a las personas como unidades fiscales.

El asilo plantea obligaciones y controversia. Nuevos Estados necesitarían sistema de recepción, decisiones, apelación y retorno, además de adherir a la Convención de Refugiados y normas europeas si ingresan en la UE. La frontera abierta para ciudadanos del CTA no impide controles documentales a solicitantes. Un acuerdo de responsabilidad con Londres y Dublín sería deseable para evitar traslados y vacíos, pero la cooperación europea en asilo tiene reglas que los nuevos miembros deben aceptar.

En Irlanda del Norte, la movilidad en la isla forma parte de la paz y la economía. Una Irlanda unida eliminaría diferencias de política dentro de la isla, pero situaría plenamente la frontera migratoria europea en puertos y aeropuertos hacia Gran Bretaña. El CTA protege británicos e irlandeses; nacionales de terceros países pueden necesitar permisos diferentes. Las empresas, universidades y familias requieren orientación sencilla para no convertir derechos formales en errores administrativos.

La percepción pública no responde sólo a tasas. Cambios rápidos, presión sobre vivienda y discursos nacionales pueden intensificar oposición incluso donde la migración sostiene servicios. Los movimientos independentistas enfrentan una elección narrativa: definir nación cívica abierta o asociar soberanía con exclusión. Escocia ha articulado la primera; Gales necesita conciliar lengua e incorporación; una Irlanda unida debe asegurar que población británica no sea tratada como migrante en su lugar de nacimiento.

La política más robusta relaciona migración con población, productividad y capacidad local. Objetivos transparentes, financiación a municipios, fiscalización laboral e inversión en vivienda reducen tensiones. La independencia cambia quién decide; la calidad del resultado depende de esas herramientas. En los cuatro territorios, el envejecimiento convierte la inmigración en recurso económico y tema identitario a la vez.

CAPÍTULO XXII | DEUDA, ACTIVOS, PENSIONES Y TRANSICIÓN FISCAL

1. El balance de separación

La separación requeriría un balance inicial. El Estado británico posee edificios, reservas, empresas, infraestructura, equipos militares y activos financieros; también deuda, contratos, pensiones públicas y obligaciones contingentes. El derecho internacional ofrece principios, no una fórmula automática para una

unión voluntaria y compleja. Las partes pueden repartir por población, contribución histórica, localización o negociación global. La mayor parte de la deuda está emitida por el Tesoro británico, que seguiría obligado ante tenedores aún si el nuevo Estado acepta pagar una porción a Londres.

Esa distinción protege los mercados. No se “cambian” bonos existentes por deuda escocesa o galesa sin consentimiento; el Estado continuador paga y recibe una obligación intergubernamental, o los nuevos Estados emiten deuda para transferir valor. El método afecta interés y moneda. Asumir una cuota poblacional puede facilitar buena voluntad y crédito; rechazarla por falta de titularidad legal reduce pasivo inicial y puede endurecer negociaciones sobre activos, reconocimiento y acceso monetario.

Los activos localizados suelen permanecer donde están, pero no siempre compensan contribuciones históricas. Un cuartel escocés podría transferirse a Escocia y un sistema informático en Inglaterra serviría a toda la población. Reservas del Banco de Inglaterra, patrimonio diplomático y fondos públicos requieren evaluación. La negociación puede evitar tasar cada objeto mediante compensaciones cruzadas: deuda por activos, continuidad de servicios por pagos, o propiedad conjunta temporal.

Las pensiones estatales son gasto corriente respaldado por impuestos, no cuentas individuales completas. Sin embargo, las contribuciones crean expectativas y coordinación internacional. Londres podría continuar pagando derechos adquiridos a residentes que contribuyeron al sistema, como paga a pensionistas en el exterior; el nuevo Estado asumiría futuras acumulaciones y complementos. Otra solución reparte responsabilidad por residencia o fecha. Cada modelo cambia de forma decisiva el costo de la unidad irlandesa y de las independencias.

Las pensiones del sector público y fondos privados tienen activos, empleadores y regulación. Deben evitarse déficits por traslado de patrocinadores o moneda. Los esquemas británicos podrían continuar transfronterizos bajo supervisión acordada; la regulación europea impone condiciones de financiación. Comunicar garantías temprano impide retiros o traslado de sedes. El debate político suele hablar de un “reparto de la deuda” y olvida que la confianza en pensiones puede mover más hogares que una cifra macroeconómica.

La transición fiscal necesita liquidez. Nuevas agencias comienzan a gastar antes de recaudar plenamente; una moneda propia requiere reservas; y la incertidumbre puede reducir actividad. Líneas de crédito, pagos de liquidación y acceso temporal a sistemas británicos pueden suavizar el día uno. A cambio, Londres puede exigir garantías y calendario. La cooperación no es generosidad: evita que una crisis vecina golpee bancos, comercio y ciudadanos del Estado restante.

Escocia y Gales ya tienen capacidad de endeudamiento descentralizada, pero con límites. Para 2025–26 los topes anuales de capital eran aproximadamente £472 millones para Escocia y £150 millones para Gales, con límites acumulados de £3.145 millones y £1.000 millones. Esos marcos no preparan automáticamente para deuda soberana de decenas de miles de millones. Crear oficina de deuda, estrategia de vencimientos, estadística fiscal independiente y regla de sostenibilidad sería parte esencial del proceso.

Partida	Pregunta de negociación	Riesgo si se posterga
Deuda soberana	Cuota, moneda, instrumento y calendario	Prima de riesgo y disputa con el Tesoro
Activos	Localización, uso y compensación	Interrupción de servicios y litigios
Pensiones estatales	Derechos previos y futuras contribuciones	Inseguridad de hogares y gran diferencia fiscal
Fondos públicos/privados	Patrocinio, regulación y moneda	Déficits, traslados y discriminación
Liquidez	Crédito transitorio y reservas	Crisis operativa durante la creación institucional

Este inventario muestra por qué el reparto patrimonial no puede dejarse para el final. Deuda y pensiones afectan confianza financiera y hogares; activos y fondos exigen continuidad operativa; la liquidez decide si

el nuevo gobierno paga durante sus primeros meses. Cada partida necesita fecha de valoración, autoridad responsable y procedimiento para resolver diferencias.

Un acuerdo marco previo al voto no puede fijar todos los importes, pero sí puede establecer continuidad de derechos, ausencia de impago, acceso mutuo a registros y arbitraje. Esas reglas reducen el incentivo de cada parte a usar la transición como amenaza y permiten que los presupuestos posteriores se construyan sobre obligaciones verificables.

CAPÍTULO XXIII | ENERGÍA, AGUA, CLIMA E INFRAESTRUCTURA

1. Interdependencia física

Las redes no respetan las fronteras. Electricidad, gas, agua, ferrocarriles, carreteras, telecomunicaciones y cables fueron financiados y regulados dentro de un solo Estado. La independencia cambia propiedad y autoridad, pero no vuelve racional duplicar todos los sistemas. El modelo europeo demuestra que Estados soberanos pueden compartir mercados y operadores; exige reguladores compatibles, reglas de acceso, pagos por congestión y mecanismos de emergencia. La política debe decidir qué se integra y quién resuelve disputas.

Escocia produce una elevada proporción de electricidad renovable y exporta en determinados períodos, pero depende de la red británica para equilibrar oferta y demanda. La eólica del mar del Norte necesita transmisión hacia centros de consumo y contratos estables. Un mercado eléctrico común podría continuar con tarifas y gobernanza negociadas. Salir abruptamente elevaría costo de capital y obligaría a crear un operador de sistema. Las rentas de recursos marítimos dependerían además de delimitación de aguas y propiedad de Crown Estate Scotland.

Los hidrocarburos siguen siendo fiscal y laboralmente relevantes aunque declinen. La frontera marítima puede trazarse por equidistancia u otro acuerdo, y determina licencias, desmantelamiento y pasivos ambientales. Contar reservas brutas como ingreso disponible ignora costos y la transición climática. Un fondo soberano sólo acumula si existen superávits; un Estado con gran déficit inicial no puede gastar y ahorrar el mismo ingreso. El activo más duradero puede ser la cadena de ingeniería, no el barril restante.

Gales aporta generación, puertos y recursos hídricos. La memoria de embalses construidos para ciudades inglesas otorga al agua peso simbólico, pero los derechos y redes modernos requieren acuerdos de cuenca. Cobrar por recursos puede financiar comunidades; usarlo como amenaza de corte sería técnica y políticamente impracticable. La adaptación climática, inundaciones y calidad fluvial necesitan coordinación porque ríos y ecosistemas cruzan la frontera.

En la isla de Irlanda, el mercado eléctrico único ya opera entre dos jurisdicciones. Es un precedente útil: reglas conjuntas, operador y supervisión permiten eficiencia sin decidir soberanía. La reunificación simplificaría algunas competencias y cambiaría la relación con Gran Bretaña mediante interconectores. La seguridad energética dependería de más conexiones y renovables, no de aislamiento. El modelo también muestra que las instituciones transfronterizas pueden preparar integración funcional sin predeterminedar estatus.

Los ferrocarriles y carreteras exigen planificación coordinada. La línea de la costa oeste y este conectan Escocia con Inglaterra; los corredores A55 y M4 conectan Gales; ferris unen Irlanda del Norte, Gran Bretaña e Irlanda. Los controles aduaneros pueden ubicarse en terminales o depósitos interiores, pero necesitan terreno y sistemas. Retrasar la infraestructura hasta después del voto produce cuellos de botella; construirla antes puede parecer que el gobierno da por decidida la separación.

La transición climática puede ser un campo de competencia cooperativa. Estados nuevos querrán atraer manufactura verde mediante subsidios, mientras Londres busca proteger su mercado. Reglas de ayudas estatales y carbono en la UE limitarían algunas políticas. Un consejo energético de las islas, con mercado común y metas compatibles, preservaría escala. La soberanía efectiva se mide por capacidad de acordar interdependencia, no por fingir autosuficiencia física.

CAPÍTULO XXIV | TERRITORIOS DE ULTRAMAR, DEPENDENCIAS Y COMMONWEALTH

1. Ondas externas

Los catorce territorios británicos de ultramar no forman parte del Reino Unido. *Londres gestiona defensa y relaciones exteriores, mientras cada territorio tiene constitución y grados diferentes de autogobierno. Gibraltar, Bermudas, las Islas Malvinas, Anguila y los demás no se transferirían a Escocia o Gales ni votarían en sus referéndums. El Estado continuador heredaría probablemente la relación, pero su capacidad militar, diplomática y presupuestaria podría reducirse.*

Gibraltar sería especialmente sensible porque el Brexit ya alteró su frontera con España y su acceso europeo. Una reducción territorial británica puede reabrir preguntas sobre influencia y garantías, aunque no cambia la voluntad local expresada en referéndums. Las Malvinas dependen de la defensa y diplomacia británicas; Argentina podría interpretar una disolución como debilitamiento, sin que ello modifique automáticamente el principio de autodeterminación de los isleños ni la disputa de soberanía. Cada caso mantiene su historia y derecho específicos.

Las dependencias de la Corona (Jersey, Guernsey e Isla de Man) tampoco pertenecen al Reino Unido. Deben lealtad a la Corona y el Reino Unido responde por defensa y relaciones exteriores, pero tienen legislaturas, fiscalidad y derecho propios. *Si la Corona se dividiera entre varios reinos, sería necesario aclarar qué gobierno asesora al monarca en asuntos de las dependencias y quién representa sus intereses. La opción más simple es continuidad con el Estado británico restante mediante nuevos protocolos.*

La Commonwealth es una asociación voluntaria de 56 Estados y no concede preferencias automáticas uniformes. Nuevos Estados pueden solicitar ingreso si cumplen criterios de democracia, derecho y vínculos. La existencia de repúblicas demuestra que reconocer a Carlos III no es condición. Escocia y Gales tendrían argumentos históricos, pero la admisión depende de los miembros y no reemplaza tratados comerciales, visas ni representación diplomática.

Para Londres, perder naciones internas afectaría al poder blando. El nombre “*Global Britain*”, la radiodifusión de la BBC, universidades, cultura y fuerzas armadas se apoyan en una identidad británica multinacional. El Estado restante conservaría gran parte de la red, pero enfrentaría preguntas sobre bandera, gentilicio y legitimidad para representar tradiciones salidas de la unión. Los nuevos Estados podrían compartir instituciones culturales por convenio o crear las propias.

La Commonwealth también puede amortiguar la ruptura. Compartir monarca, ciudadanía compatible, movilidad juvenil, cooperación educativa y encuentros multilaterales permite continuidad simbólica. No sustituye el mercado interno ni la UE, pero ofrece un marco donde la separación no necesita convertirse en enemistad. Su efecto dependerá de si la negociación británica es percibida internacionalmente como democrática y ordenada.

Los otros reinos de Carlos III observarían un precedente constitucional. La persona del monarca continúa mientras cada parlamento mantenga sus leyes de sucesión; un cambio de título británico no altera por sí mismo las coronas canadiense o australiana. Sin embargo, una crisis prolongada puede acelerar debates republicanos ya existentes. El efecto sería político y simbólico, no una cadena jurídica automática.

CAPÍTULO XXV | ESCENARIOS 2026–2040

1. Trayectorias posibles

El primer escenario es una unión reformada. Westminster acuerda principios para futuras consultas, amplía autonomía fiscal, protege la Convención Sewel y crea instituciones intergubernamentales con resolución de disputas. Gales obtiene mayor capacidad, Escocia permanece y el Marco de Windsor se estabiliza. El costo es que Inglaterra debe aceptar límites a su mayoría y que los nacionalistas deben presentar la reforma como resultado, no demora. Este escenario gana plausibilidad si los servicios mejoran y el apoyo a la independencia no supera una mayoría sostenida.

El segundo es la independencia escocesa pactada. Un mandato electoral claro conduce a una transferencia de competencia, victoria del sí y negociación de varios años. Escocia usa temporalmente la libra, solicita adhesión a la UE y arrienda las bases nucleares mientras Londres construye reemplazo. La frontera comercial aumenta fricción, compensada en parte por un acuerdo profundo. La transición es costosa pero controlable si deuda, pensiones y seguridad se pactan antes de la fecha efectiva.

El tercero es la reunificación irlandesa preparada. Encuestas y elecciones muestran mayoría probable; Londres convoca, Dublín publica modelo constitucional y ambos electorados aprueban. Existe una transición de diez años para servicios, financiación británica decreciente, inversión europea y garantías unionistas. El Norte permanece con instituciones regionales fuertes. El riesgo principal es que expectativas fiscales y sanitarias sean irreales o que una mayoría estrecha sea interpretada como victoria de una comunidad.

El cuarto es ascenso galés sin ruptura inmediata. Plaid utiliza el gobierno para mejorar capacidad, obtiene poderes fiscales y derecho de consulta, y somete la independencia a una convención. Una mayoría no aparece antes de 2035, pero Gales se convierte en socio casi confederal. Este camino puede culminar en soberanía o estabilizar una autonomía profunda. Su variable crítica es el desempeño del gobierno: la identidad constitucional no compensa servicios deficientes.

El quinto es bloqueo y crisis. Londres niega consultas sin ofrecer reforma; gobiernos territoriales organizan votaciones no reconocidas o convierten elecciones en plebiscitos; se multiplican litigios y desobediencia institucional. No produce independencia rápida porque faltan reconocimiento y acuerdos. Sí puede deteriorar la inversión, cooperación y legitimidad. En Irlanda del Norte, un proceso mal gestionado tendría riesgo adicional de desorden comunitario.

El sexto es una ruptura acumulada. La salida escocesa modifica incentivos: puede fortalecer a Plaid y al nacionalismo irlandés al demostrar que la secesión es negociable, o debilitarlos si los costos iniciales son visibles. Si después se reunifica Irlanda y Gales elige la independencia, Inglaterra queda como principal sucesor y debe refundar el Estado. La secuencia puede extenderse dos décadas; hablar de un solo “día del fin” oculta esta lógica.

Los escenarios no reciben probabilidades porque la evidencia no permite asignarlas responsablemente. Funcionan como pruebas de consistencia: qué decisiones deben ocurrir, qué indicadores anticipan movimiento y dónde aparecen cuellos de botella. El futuro real puede combinar elementos: reforma seguida de consulta, independencia sin adhesión rápida a la UE, o reunificación con autonomía más fuerte de lo previsto.

Escenario	Desencadenante	Principal riesgo	Señal anticipada
Unión reformada	Acuerdo político británico	Reforma insuficiente o reversible	Ley de garantías y nueva financiación
Escocia independiente	Referéndum pactado y mayoría sí	Frontera, déficit y moneda	Mandato sostenido + sección 30
Irlanda unida	Mayoría probable y dos consentimientos	Integración fiscal y comunitaria	Plan de Dublín + cambio estable en encuestas
Gales soberano	Mayoría social y poder de consulta	Capacidad fiscal y frontera	Convención + crecimiento del sí
Bloqueo	Veto prolongado sin reforma	Deslegitimación y conflicto institucional	Consultas no reconocidas

CAPÍTULO XXVI | QUÉ MEDIR A PARTIR DE AHORA

1. Tablero de indicadores

La primera señal es la persistencia de la opinión. Deben seguirse promedios de encuestas con pregunta comparable, tratamiento de indecisos, intención de participar y escenarios de campaña. Una mayoría de

un mes no prueba un cambio estructural. Importa si supera 50 % durante un año, aparece en varios encuestadores y resiste preguntas sobre moneda, impuestos o servicios. En Irlanda del Norte debe observarse además diferencia entre preferencia inmediata y disposición bajo modelos concretos.

La segunda es el mandato electoral. No basta con contar escaños de partidos nacionalistas porque los votantes eligen múltiples políticas. Los manifiestos deben especificar si la elección autoriza solicitar consulta, celebrarla o negociar independencia. Una mayoría de votos populares para partidos con un compromiso explícito tiene mayor peso que una mayoría de escaños producida por el sistema electoral. La respuesta de Westminster debería vincularse a reglas conocidas, no a conveniencia partidaria del momento.

La tercera es capacidad fiscal. El tablero debe incluir saldo neto, ingresos por habitante, gasto social, deuda proyectada, productividad, inversión y costo de financiación. Para Escocia y Gales interesa la trayectoria, no sólo el déficit de un año. Para Irlanda unida deben publicarse supuestos sobre pensiones, transferencias británicas, armonización y crecimiento. Toda cifra debe mostrar precios, año y sensibilidad.

La cuarta es comercio y frontera. Se observarán ventas al resto del Reino Unido, exportaciones a la UE, tiempos aduaneros, participación de pequeñas empresas y evolución del acuerdo UE-Reino Unido. En Irlanda del Norte son claves el uso del mercado interno, comercio con Irlanda y percepción empresarial del Marco de Windsor. La fricción se manifiesta antes en decisiones de inversión y rutas logísticas que en el total anual.

La quinta es demografía. Nacimientos, muertes, migración por origen, edad, empleo y retención de graduados determinan sostenibilidad. El total poblacional puede subir mientras la proporción laboral cae. También deben medirse vivienda, integración y uso de lenguas. Los movimientos constitucionales que prometen migración distinta necesitan mostrar si las comunidades pueden absorber y retener personas.

La sexta es preparación estatal. Proyectos de ley, inventarios de funciones, contratación, sistemas digitales, reguladores y acuerdos transitorios indican si la soberanía pasa de consigna a programa. La publicación de riesgos aumenta credibilidad, aunque ofrezca argumentos al adversario. Ocultar problemas hasta después del voto eleva el costo y repite la experiencia del Brexit.

La séptima es seguridad. El calendario Dreadnought, inversión en Clyde, estudios de sitios alternativos, doctrina de la OTAN y planes escoceses de defensa revelarán el valor negociador de Faslane. Si Londres inicia discretamente una alternativa, la palanca escocesa disminuye; si invierte exclusivamente en Clyde, aumenta la dependencia. Ninguna cifra de traslado debe considerarse actual sin un proyecto oficial y una base de precios.

La octava es la confianza entre gobiernos. Reuniones, mecanismos de disputa, cumplimiento de Sewel, implementación de Windsor y cooperación británico-irlandesa son indicadores adelantados de una transición pacífica. La separación negociada requiere más cooperación precisamente cuando las partes compiten. Si las instituciones no pueden administrar desacuerdos cotidianos, tendrán dificultades para repartir un Estado.

Indicador	Fuente preferida	Umbral de atención
Apoyo constitucional	Promedio de encuestas comparables	Mayoría sostenida y robusta a escenarios
Mandato	Voto popular y manifiestos	Compromiso explícito respaldado electoralmente
Fiscal	ONS, gobiernos y consejos fiscales	Trayectoria financierable y supuestos publicados
Comercio	Estadísticas territoriales y aduanas	Cambio de inversión, rutas o costos
Demografía	Censos y estimaciones ONS/NISRA	Caída laboral o dependencia migratoria
Nuclear	MOD, Parlamento y auditoría	Selección de sitio, costo y calendario oficial
Cooperación	Acuerdos y cumplimiento	Mecanismos estables de negociación

El tablero debe publicarse como serie, no como colección de titulares. Una señal sólo adquiere fuerza cuando persiste, aparece en fuentes comparables y modifica decisiones observables. El propósito no es predecir una fecha de ruptura, sino detectar cuándo una demanda política se convierte en capacidad institucional o cuándo pierde apoyo.

La combinación importa más que un indicador aislado. Una mayoría sostenida sin plan fiscal puede producir mandato pero no preparación; una administración técnicamente lista sin apoyo social carece de legitimidad; un sitio nuclear alternativo reduce la palanca escocesa aunque no cambie una encuesta. Leer las señales juntas evita conclusiones automáticas.

CAPÍTULO XXVII | SALUD, EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL

1. El Estado que recibe la ciudadanía

Los servicios públicos son el lugar donde una decisión constitucional se vuelve experiencia diaria. Escocia, Gales e Irlanda del Norte ya administran salud y educación, de modo que hospitales, escuelas y universidades no tendrían que nacer desde cero. La separación, sin embargo, cambia financiación, pensiones, regulación profesional, compra de medicamentos y acceso transfronterizo. El desafío no es sólo continuar los edificios existentes, sino reemplazar las funciones centrales que sostienen pagos, datos, investigación y redistribución.

El NHS no es una única organización operativa: existen servicios nacionales con reglas y prioridades propias, financiados mediante presupuestos territoriales. Esa descentralización reduce el salto institucional. Los acuerdos actuales permiten derivaciones y atención especializada a través de fronteras; deberían convertirse en convenios internacionales con tarifas, estándares y solución de controversias. Una cirugía que hoy se autoriza administrativamente no puede quedar suspendida mientras los gobiernos negocian quién factura.

La compra farmacéutica muestra la ventaja de escala. El Reino Unido negocia precios, regula medicamentos y mantiene reservas mediante organismos comunes. Escocia o Gales podrían crear agencias, reconocer temporalmente autorizaciones británicas o cooperar con la Agencia Europea de Medicamentos durante su adhesión. La duplicación inmediata elevaría costos y escasez. Un período de reconocimiento mutuo preservaría suministro, mientras los nuevos parlamentos deciden hasta dónde divergir.

La protección social presenta una división distinta. Escocia ya administra prestaciones descentralizadas mediante Social Security Scotland, pero la pensión estatal, Universal Credit y gran parte del seguro social siguen siendo británicos. Gales posee menos infraestructura. Irlanda del Norte aplica políticas en gran medida paralelas a Gran Bretaña con administración propia. Cada separación exigiría bases de datos,

sistemas de pago, antifraude, apelación y financiación. Los sistemas digitales son parte de la soberanía tanto como una Constitución.

La educación superior conecta movilidad, tasas e investigación. Estudiantes escoceses, galeses, ingleses, norirlandeses e irlandeses tienen tratamientos distintos según residencia y acuerdos. La independencia obligaría a definir quién es estudiante doméstico, cómo se reconocen títulos y qué ocurre con préstamos existentes. Una adhesión europea puede ampliar movilidad y fondos, pero no reemplaza de inmediato el financiamiento británico de investigación. Las universidades necesitan garantías plurianuales para evitar la salida de personal.

La reunificación irlandesa requiere convergencia entre un sistema sanitario de acceso universal sin cobro directo en el Reino Unido y un sistema irlandés con una mezcla diferente de provisión y elegibilidad. Extender un modelo de golpe puede ser fiscalmente imposible y socialmente regresivo. La transición podría mantener temporalmente un servicio regional norirlandés, armonizar listas y expedientes, e invertir en atención primaria. El resultado debe evaluarse por acceso y resultados, no por el nombre institucional.

Los trabajadores públicos necesitan certeza sobre empleo, convenio, antigüedad y pensión. Transferencias automáticas con protección legal evitan una fuga administrativa justo cuando el Estado necesita experiencia. Las nuevas estructuras también pueden descentralizar empleos fuera de las capitales y reducir la desigualdad territorial. Usar la transición para purgas partidarias o duplicar jerarquías destruiría capacidad y confianza.

La promesa constitucional más exigente es continuidad con mejora. Mantener todos los servicios mientras se construyen aduanas, tesorería y defensa requiere priorización fiscal. Los programas independentistas deben costear no sólo el estado final, sino los años en que conviven sistemas viejos y nuevos. El ciudadano juzgará la soberanía por una receta, una beca o una pensión que llega a tiempo.

Servicio	Capacidad ya descentralizada	Función nueva o acuerdo necesario
Salud	Gestión territorial de NHS	Medicamentos, compras, derivaciones y datos transfronterizos
Educación	Currículo, escuelas y universidades	Préstamos, investigación, aranceles y reconocimiento
Prestaciones	Parcial en Escocia; administración territorial en NI	Seguro social completo, pagos y apelación
Pensiones	Administración británica	Reparto de derechos acumulados y futuras contribuciones
Profesiones	Regulación mixta	Reconocimiento mutuo y nuevos registros

La descentralización reduce el número de instituciones que deberían crearse, pero no elimina las conexiones nacionales que las financian o regulan. La prioridad de transición es identificar cada función compartida y asignar una solución temporal antes de diseñar el sistema definitivo.

Un período de continuidad jurídica, con reconocimiento recíproco y financiación pactada, protege a pacientes, estudiantes y pensionistas mientras se construyen capacidades nuevas. Su duración debería ser limitada y revisable: extenderlo sin calendario posterga decisiones; terminarlo antes de que existan reemplazos convierte la soberanía en interrupción de servicios.

CAPÍTULO XXVIII | EMPRESAS, BANCOS, INVERSIÓN Y MERCADOS

1. Reacción económica

La economía comienza a reaccionar antes de una fecha legal. Empresas deciden sedes, contratos y depósitos según la probabilidad de fronteras, moneda y regulación. Esa anticipación puede confundirse con campaña: un traslado anunciado puede ser advertencia política o gestión real de riesgo. El análisis debe mirar inversión, empleo y balances, no sólo declaraciones. Un proceso con reglas y calendario reduce el valor de esperar; una disputa sin final incentiva posponer proyectos.

Los bancos plantean un riesgo sistémico. Entidades con marca escocesa operan bajo licencias y garantías británicas, y sus activos superan ampliamente la capacidad fiscal de un Estado pequeño. Pueden redomiciliar su sede legal en Inglaterra mientras mantienen empleo en Escocia, como ya planificaron en 2014. Eso protege acceso al Banco de Inglaterra y al esquema de depósitos, pero mueve parte de impuestos y regulación. Una Escocia independiente necesitaría su propio seguro de depósitos y acuerdos de resolución.

Usar la libra unilateralmente no impide banca ni pagos, pero el Banco de Inglaterra no tendría obligación de prestar al soberano o rescatar entidades escocesas. Los bancos pueden conservar cuentas en libras y acceder mediante filiales; el costo dependerá de regulación y garantía. Crear una moneda propia exige conversión de depósitos y contratos. Si el público teme la depreciación, puede mover fondos antes de la fecha, por lo que controles o una garantía creíble deben prepararse sin generar pánico.

Gales presenta menor concentración financiera y mayor exposición de pequeñas y medianas empresas al mercado inglés. La prioridad sería mantener pagos, IVA, transporte y estándares con mínima carga. Una ventanilla aduanera y subsidio temporal de cumplimiento pueden evitar que firmas abandonen exportaciones. Pero subsidiar indefinidamente la fricción creada por una decisión política reduce los recursos que la independencia pretende liberar.

Irlanda del Norte ofrece un laboratorio. El acceso dual puede atraer inversión si las reglas son estables y comprensibles. También puede desalentarse cuando el Ejecutivo se suspende o Londres y Bruselas disputan la implementación. Una Irlanda unida eliminaría parte de la ambigüedad europea, a la vez que cambiaría impuestos, derecho laboral y acceso británico. Las empresas valoran un período largo de opción y equivalencia más que una conversión instantánea.

Los contratos públicos y las cadenas de defensa merecen atención. Astilleros, aeroespacio, tecnología y proveedores dependen de compras británicas que pueden reservarse por seguridad nacional. Escocia podría negociar participación transitoria y luego competir como aliado; no debe suponer que todos los contratos permanecen por localización. Londres tampoco puede relocalizar de inmediato capacidad especializada sin costo. La interdependencia crea una negociación sobre empleo y seguridad.

La inversión extranjera comparará acceso a mercados, talento, impuestos y estabilidad. Una tasa corporativa baja atrae bases sólo si existe infraestructura y credibilidad; además, la competencia fiscal reduce ingresos. Pertenecer a la UE puede ser ventaja para Escocia o Gales, pero durante la espera existe un intervalo regulatorio. Publicar una hoja de ruta con reconocimiento temporal, arbitraje y protección de propiedad es más valioso que prometer un dividendo abstracto.

La Bolsa, la deuda y el sector asegurador seguirían vinculados a Londres por escala, incluso después de la soberanía. Los Estados pequeños europeos usan centros financieros vecinos y normas compartidas. La estrategia razonable combina regulación propia con cooperación profunda, en lugar de replicar todos los mercados. La pregunta es qué riesgos conserva el nuevo Estado y cuáles comparte a cambio de límites sobre su autonomía.

SEÑAL TEMPRANA

Los anuncios empresariales deben verificarse contra actos: registro de nuevas sedes, inversión, contratación y exposición bancaria. La retórica de campaña puede exagerar tanto la fuga como el dividendo; los balances muestran qué riesgo se está trasladando realmente.

CAPÍTULO XXIX | MINORÍAS, DERECHOS Y REGLAS PARA PERDER

1. Legitimidad de la transición

La calidad de un proceso se mide por el lugar que ofrece a quienes votan contra el resultado. En Escocia, casi la mitad podría preferir la unión; en Gales, una eventual mayoría independentista surgiría de una sociedad inicialmente más escéptica; en Irlanda del Norte, la división tiene memoria de violencia. Tratar una mayoría simple como licencia para excluir transforma una decisión territorial en conflicto de ciudadanía. La constitución y el tratado deben proteger la participación, lengua, religión y vínculos externos.

Una mayoría ordinaria es la regla democrática más clara para la pregunta final y coincide con el marco irlandés. Umbrales superiores parecen proteger estabilidad, pero permiten que una minoría gane mediante

abstención y generan disputa sobre qué votos cuentan. La estabilidad puede construirse de otro modo: campaña regulada, período deliberativo, plan previo, ratificación legislativa y derechos difíciles de reformar. El resultado decide estatus; no decide cada institución del futuro.

La franquicia importa. El referéndum escocés de 2014 incluyó residentes de dieciséis y diecisiete años y ciudadanos elegibles según reglas acordadas. Un nuevo voto debe decidir participación de ciudadanos británicos, europeos y de la Commonwealth residentes, y de expatriados. Extenderla por ascendencia mundial puede diluir a quienes vivirán las consecuencias; limitarla demasiado puede excluir ciudadanos desplazados. La regla debe fijarse antes de que las encuestas permitan calcular beneficiarios.

Los derechos lingüísticos tienen formas distintas. El galés necesita provisión activa para existir en servicios y educación; el gaélico y el scots requieren apoyo adaptado; el irlandés y el ulster scots poseen significado comunitario. Reconocer una lengua sin personal ni presupuesto produce derechos nominales. Imponerla como barrera laboral sin transición genera resentimiento. Los nuevos Estados pueden establecer obligaciones progresivas y autoridades independientes.

La libertad religiosa y la educación son particularmente sensibles en Irlanda del Norte. Escuelas separadas reflejan historia comunitaria; la integración no puede imponerse de la noche a la mañana, pero puede financiarse y ampliarse. Las instituciones de poder compartido quizá deban continuar incluso si cambia la soberanía, porque protegen una minoría grande y territorialmente concentrada. La unidad estatal no exige uniformidad administrativa.

La propiedad, los contratos y la justicia deben atravesar la fecha efectiva sin vacío. Los tribunales pueden continuar aplicando derecho existente hasta que el nuevo parlamento lo modifique. La independencia no invalida títulos de propiedad ni permite la confiscación por identidad. Una corte constitucional y una comisión de derechos pueden revisar leyes transitorias. El Estado restante debe ofrecer iguales garantías a los ciudadanos del nuevo Estado que residan en su territorio.

Los símbolos deben negociarse como parte de la convivencia. Bandera, himno, días conmemorativos y nombres de instituciones comunican a quién pertenece. Compartir o crear símbolos neutrales puede parecer concesión a quienes buscan ruptura completa, pero facilita la lealtad de la minoría. En Irlanda, incorporar elementos británicos y del Norte sería una prueba de que la reunificación cambia a toda la isla. En Escocia y Gales, reconocer contribuciones británicas evita reescribir la historia como ocupación uniforme.

Una comisión independiente de transición puede vigilar compromisos, publicar datos y recibir reclamos. La observación internacional sería útil en la isla de Irlanda y opcional en otros procesos. La reconciliación no termina con un escrutinio: partidos, medios y escuelas deben explicar que la ciudadanía del vecino no depende de haber votado correctamente. La regla fundamental de una nueva comunidad política es permitir perder sin quedar fuera.

Garantía	Instrumento	Objetivo
Ciudadanía y residencia	Tratado + leyes paralelas	Evitar pérdida de estatus y movilidad
Lenguas y cultura	Constitución, estatutos y presupuesto	Provisión real sin exclusión
Poder regional	Autonomía y representación	Proteger minorías concentradas
Derechos y justicia	Carta, corte y supervisión	Controlar mayorías transitorias
Implementación	Comisión conjunta e informes	Hacer verificables los compromisos

Estas garantías requieren texto, presupuesto y supervisión. Una declaración de derechos sin servicios bilingües, jueces independientes o vías de reclamo ofrece reconocimiento simbólico, pero no seguridad cotidiana. Los acuerdos deben identificar quién responde, en qué plazo y ante qué tribunal o comisión.

La prueba política llega cuando la mayoría acepta límites en beneficio de quienes votaron distinto. Esa restricción voluntaria convierte un resultado aritmético en un orden constitucional capaz de durar y reduce el riesgo de que la nueva frontera traslade el conflicto desde el territorio hacia la ciudadanía.

CAPÍTULO XXX | SOCIOLOGÍA, IDENTIDAD Y MEDIOS

1. Opinión pública y encuadre

La posibilidad de disolución no se decide únicamente en tribunales, parlamentos o planillas fiscales. Depende de cómo cada sociedad imagina el grupo al que pertenece, qué instituciones considera propias y qué riesgo atribuye al cambio. La identidad británica convive con identidades inglesa, escocesa, galesa, irlandesa y norirlandesa; ninguna funciona como un interruptor binario. Una persona puede sentirse intensamente escocesa y votar por la unión, o sostener la independencia por razones democráticas sin una identidad nacional excluyente.

British Social Attitudes 41 mostró que en Inglaterra 45 % se describía igualmente inglés y británico, mientras en Escocia 57 % se declaraba exclusivamente o principalmente escocés y 25 % igualmente escocés y británico. Esas categorías miden intensidad relativa, no conducta automática. La misma investigación encontró diferencias entre el nacionalismo del Brexit y el independentismo escocés: entre quienes apoyaban Brexit pesaban más nacimiento y ascendencia para definir lo británico; los partidarios de la independencia tendían a una concepción más cívica de lo escocés.

La distinción evita dos simplificaciones. El independentismo escocés no es necesariamente un nacionalismo étnico cerrado: propone reingresar en la Unión Europea y una política migratoria más abierta. El unionismo tampoco es una sola cultura inglesa: incluye escoceses, galeses y norirlandeses que combinan identidad territorial y británica, valoran redistribución o temen una frontera. Analizar cada campo como una esencia impide comprender por qué el voto puede cambiar cuando se mencionan moneda, salud, Europa o liderazgo.

Veinticinco años de Scottish Social Attitudes muestran otra paradoja. La identidad británica no se debilitó linealmente desde la devolución y las actitudes sociales de Escocia e Inglaterra no divergen en todos los asuntos; sin embargo, el apoyo a la independencia creció respecto de los primeros años autonómicos, en especial durante y después de 2014. La preferencia constitucional puede moverse por evaluación institucional y acontecimientos, aun cuando los valores culturales cambien poco.

2. Cómo los medios convierten incertidumbre en relato

La cobertura periodística elige encuadres. La investigación de Marina Dekavalla sobre el referéndum de 2014 encontró que los marcos de competencia estratégica y de política pública dominaron televisión y prensa, y que el primero ganó peso al acercarse la votación. Presentar el proceso como carrera enfatiza encuestas, errores y ganadores; presentarlo como decisión de política obliga a explicar moneda, gasto, ciudadanía y relaciones exteriores. Ambos son legítimos, pero producen ciudadanos con información diferente.

Los campos también distribuyen emociones de manera asimétrica. Estudios sobre comunicación de 2014 hallaron que Better Together concentró mensajes en pérdidas asociadas al sí, mientras Yes Scotland puso el acento en ganancias de la independencia. Esa arquitectura persiste: el statu quo ofrece seguridad y advierte costos; el cambio promete agencia y minimiza fricción. Un informe imparcial debe someter ambos relatos a la misma prueba: el riesgo de salir y el costo de continuar.

El memorando de Cardiff ofrece un ejemplo actual. Parte de la prensa lo describió como pacto para romper el Reino Unido; sus firmantes lo presentaron como cooperación democrática y derecho a decidir. El documento no convoca referéndums ni compromete jurídicamente a los tres gobiernos, pero tampoco es una fotografía ceremonial sin consecuencias: coordina partidos que ocupan las tres primeras jefaturas autonómicas. La noticia responsable identifica esos dos niveles y evita convertir intención en calendario.

Las fuentes interesadas deben citarse por su carácter. Un gobierno publica escenarios para defender su proyecto; un partido selecciona cifras compatibles con su campaña; un centro académico puede usar supuestos discutibles; un medio busca relevancia y velocidad. Nada de ello invalida automáticamente la información. Obliga a contrastar metodología, fecha, pregunta y universo. Las estadísticas oficiales tienen más autoridad descriptiva, aunque también dependen de convenciones contables.

3. Generaciones, inmigración y territorio

Edad, educación, lugar y memoria influyen en el voto. Los jóvenes suelen mostrar mayor apertura a la independencia en Escocia y Gales, pero una cohorte no conserva necesariamente la misma posición toda su vida. En Irlanda del Norte, generaciones posteriores al Acuerdo de Belfast pueden identificarse menos con bloques tradicionales sin apoyar por ello una opción única. La vivienda, el mercado laboral y los servicios convierten experiencias económicas en evaluación constitucional.

La inmigración prueba la diferencia entre nación cívica y frontera estatal. Un proyecto puede defender una comunidad abierta y, al mismo tiempo, necesitar controles aduaneros o migratorios. La pertenencia cotidiana se construye mediante residencia, escuela y trabajo; la ciudadanía jurídica decide derechos. Si la campaña usa a inmigrantes como solución demográfica sin incorporarlos al relato nacional, los trata como insumo fiscal. Si los presenta como amenaza, reduce precisamente la población activa que varios territorios necesitan.

La geografía organiza percepciones. Edimburgo y Glasgow, Cardiff y los valles, Belfast y las zonas fronterizas no experimentan la unión de igual modo. Los beneficios de empleo público, energía, turismo o transferencias se distribuyen de forma desigual. Un promedio nacional puede ocultar comunidades que asumen el costo de una base militar, una transición industrial o una frontera. El mapa del voto es una invitación a investigar esas condiciones, no una prueba de identidades puras.

Plano	Pregunta de investigación	Error frecuente
Identidad	¿Se combinan pertenencias territoriales y británica?	Convertir identidad en voto automático
Encuesta	¿Qué pregunta, muestra, fecha e indecisos?	Publicar un porcentaje sin universo
Medios	¿Se informa carrera, política pública o conflicto?	Confundir encuadre con hecho
Generación	¿Es efecto de edad, cohorte o coyuntura?	Proyectar linealmente el voto joven
Territorio	¿Quién gana, paga y cruza la frontera?	Usar el promedio como experiencia común

CAPÍTULO XXXI | QUÉ ENSEÑAN OTRAS SEPARACIONES

1. Comparación internacional y límites de la analogía

Ningún precedente reproduce al Reino Unido. Quebec no salió de Canadá; Montenegro se independizó mediante una consulta acordada bajo observación internacional; Checoslovaquia se dividió por negociación de élites sin referéndum; la ruptura yugoslava produjo guerra; y la separación de Irlanda ocurrió en un contexto de violencia, imperio y partición. Comparar sirve para identificar decisiones, no para trasladar resultados como recetas.

2. Quebec: mayoría clara y deber de negociar

Después del ajustado referéndum de 1995, la Corte Suprema de Canadá rechazó un derecho unilateral de Quebec a separarse bajo la Constitución y el derecho internacional. Al mismo tiempo, sostuvo que una mayoría clara ante una pregunta clara generaría una obligación de negociar basada en federalismo, democracia, constitucionalismo, Estado de derecho y protección de minorías. La consulta no produciría independencia automática; cambiaría las obligaciones políticas de todas las partes.

La doctrina canadiense muestra una opción que el Reino Unido no ha codificado. Westminster mantiene la competencia y puede autorizar un referéndum, pero no existe una regla equivalente que defina cuándo un mandato obliga a negociar. Adoptarla limitaría discrecionalidad y exigiría interpretar “claridad”. Rechazarla

preserva flexibilidad, a costa de que la negativa pueda parecer veto indefinido. El caso también advierte que una mayoría mínima no resuelve por sí sola fronteras, deuda o derechos.

3. Montenegro: reglas acordadas antes del resultado

La consulta montenegrina de 2006 se celebró con reglas negociadas y participación europea. La Comisión de Venecia insistió en la estabilidad de la ley, la claridad de la pregunta y el acuerdo sobre condiciones antes de votar. El umbral de 55 % fue específico de aquel compromiso político y no constituye una regla universal para toda secesión. Copiarlo en Escocia o Irlanda del Norte sin base pactada permitiría a una minoría bloquear mediante abstención.

La lección general es procedimental. Los actores aceptan mejor una derrota cuando conocen la franquicia, el umbral, la supervisión y los efectos antes de medir su conveniencia. Cambiar reglas cerca de la consulta reduce confianza. En el Reino Unido, la Electoral Commission puede revisar pregunta y campaña, pero primero debe existir competencia legal y acuerdo político.

4. Checoslovaquia: una separación pacífica sin mandato directo

La llamada separación de terciopelo demuestra que ausencia de violencia no equivale a participación popular suficiente. Después de las elecciones de 1992, dirigentes checos y eslovacos incapaces de acordar un gobierno federal negociaron la disolución; no hubo referéndum y el apoyo social a la separación no había sido inequívoco al inicio. La polarización de élites convirtió la ruptura en salida institucional.

Ese caso advierte contra interpretar elecciones ordinarias como plebiscitos completos. Un partido puede ganar por economía, liderazgo o rechazo al adversario y luego utilizar el resultado para una transformación estatal. La vía puede ser legal y ordenada, pero queda una pregunta de legitimidad. Para el Reino Unido, el estándar debería ser más alto: mandato explícito, consulta y acuerdo, especialmente porque ya existen mecanismos democráticos y Estados de derecho consolidados.

5. Secesión pactada, colapso y continuidad

Los estudios comparativos de separaciones pacíficas encuentran patrones: aceptación del principio de salida, negociadores capaces de controlar coaliciones, continuidad administrativa, reparto de activos y ausencia de amenaza militar. Cuando una parte niega incluso la posibilidad o cuando las élites no pueden comprometer a sus seguidores, aumenta el riesgo de coerción y bloqueo. El Reino Unido reúne ventajas importantes: instituciones, fronteras conocidas y capacidad fiscal. También acumula activos integrados difíciles de dividir.

La distinción entre secesión y disolución afecta la continuidad exterior. Si Escocia se separa, el Estado restante probablemente conserva personalidad, asiento y tratados, como ocurrió cuando la mayor parte de Irlanda salió. Si las tres naciones abandonan la unión, la continuidad inglesa seguiría siendo posible por escala e instituciones, pero la discusión política sobre nombre y legitimidad sería mayor. Ningún precedente decide de antemano la respuesta de terceros Estados.

6. Lo que sí puede trasladarse

Cuatro reglas sobreviven a la comparación. Primero, acordar procedimiento antes que resultado. Segundo, publicar los asuntos que la consulta no resuelve. Tercero, proteger ciudadanía y minorías como parte del tratado, no como promesa posterior. Cuarto, mantener administraciones cooperando durante la confrontación política. El objetivo no es eliminar conflicto, sino impedir que la competencia por soberanía destruya la capacidad de negociar el día siguiente.

Caso	Mecanismo	Lección útil	Límite de la analogía
Quebec/Canadá	Referéndum + doctrina judicial	Mayoría clara abre negociación	Canadá es federación con constitución codificada

Montenegro	Consulta acordada y observada	Reglas estables antes del voto	Umbral de 55 % fue un acuerdo específico
Checoslovaquia	Negociación parlamentaria	Capacidad administrativa y acuerdo de élites	No hubo mandato referendario directo
Irlanda	Tratado, partición y conflicto	Frontera y minorías perduran	Contexto imperial y violento distinto
Escocia 2014	Transferencia temporal y consulta	El orden británico puede habilitar decisión	El resultado y el contexto europeo cambiaron

CONCLUSIÓN | EL FIN NO ESTÁ ESCRITO

El Reino Unido es una continuidad histórica extraordinaria precisamente porque cambió muchas veces. Su antigüedad no concede inmunidad frente a nuevas demandas de consentimiento. Las elecciones de 2026, el Brexit y las reglas diferentes de cada territorio llevaron la pregunta de la disolución del plano abstracto a una agenda institucional. Sin embargo, la separación no es hoy un hecho, una sola decisión ni una secuencia jurídica uniforme.

El punto decisivo será si Londres y las capitales territoriales pueden convertir preferencias incompatibles en procedimientos aceptados y acuerdos que protejan a quienes pierdan una votación. La unión puede durar con reformas; una Escocia independiente puede conservar al rey; una Irlanda unida puede proteger ciudadanía británica; Gales puede elegir mayor autonomía antes que soberanía. Si llega, la disolución será una cadena de decisiones sobre quién gobierna, quién paga, qué frontera se controla y a qué comunidad política pertenece cada persona.

El riesgo mayor no es solamente elegir mal entre unión e independencia. Es votar una palabra y dejar para después la moneda, los derechos, las bases militares, la deuda, los servicios y las minorías. El criterio de este informe es el inverso: reconocer la legitimidad de la pregunta y exigir que cada respuesta muestre sus condiciones.

ANEXO A · CRONOLOGÍA CONSTITUCIONAL 1536–2026

Año	Hecho	Consecuencia para la unión
1536–1543	Leyes de Gales	Integración jurídica y parlamentaria con Inglaterra
1603	Unión de las Coronas	Un monarca; reinos y parlamentos separados
1707	Actos de Unión	Nace Gran Bretaña; Escocia conserva instituciones propias
1801	Unión con Irlanda	Nace el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
1921–1922	Partición y Estado Libre Irlandés	Irlanda del Norte permanece en el Reino Unido
1927	Royal and Parliamentary Titles Act	Se consolida el nombre actual
1973	Ingreso en las Comunidades Europeas	Nueva capa de soberanía compartida
1997–1999	Referéndums y devolución	Parlamentos y ejecutivos territoriales
1998	Acuerdo de Belfast	Consentimiento y ruta legal de reunificación
2012	Acuerdo de Edimburgo	Competencia temporal para el referéndum escocés
2014	Referéndum escocés	55,3 % por permanecer
2016	Referéndum europeo	Mayorías territoriales divergentes
2020	Salida efectiva de la UE	Fronteras regulatorias nuevas
2022	Sentencia de la Corte Suprema	Holyrood no puede consultar unilateralmente
2023	Marco de Windsor	Arreglo especial para mercancías de Irlanda del Norte
2026	Elecciones, proyecto escocés y memorando de Cardiff	Coordinación renovada de demandas

ANEXO B · TABLERO ESTADÍSTICO BÁSICO

Indicador	Inglaterra	Escocia	Gales	Irlanda del Norte
Población 2024 (millones)	58,620	5,547	3,187	1,928
Población 2049 (millones)	61,832	5,475	3,195	1,909
Variación 2024–49	+5,5 %	–1,3 %	+0,3 %	–1,0 %
Brexit 2016	53,4 % salir	62,0 % permanecer	52,5 % salir	55,8 % permanecer
Bienes exportados 2025	£262,3 mil M	£32,1 mil M	£19,2 mil M	£11,0 mil M
Bienes importados 2025	£446,1 mil M	£29,4 mil M	£20,4 mil M	£10,4 mil M

Notas: población según proyecciones ONS 2024-based; comercio de bienes según Trade and Investment Core Statistics Book. Las cifras comerciales excluyen servicios y no miden comercio interno británico.

Territorio	Dato fiscal o económico	Año y alcance
Escocia	PIB £209,6 mil M; saldo GERS –10,9 % PIB	PIB 2024; saldo 2025–26
Gales	Déficit fiscal citado £14,4 mil M	Estimación del arreglo vigente discutida por la comisión
Irlanda del Norte	Ventas empresariales £109,262 mil M	NISRA 2024
Reino Unido	Migración neta 171.000	Año terminado diciembre 2025

ANEXO C · MECANISMOS DE DECISIÓN Y TRANSICIÓN

Etap	Escocia	Gales	Irlanda del Norte
Mandato	Elección y mayoría política para solicitar consulta	Mandato del Senedd y apoyo social	Evidencia de mayoría probable
Habilitación	Sección 30 o ley de Westminster	Ley o transferencia británica	Orden del secretario de Estado
Consulta	Pregunta y franquicia acordadas	Reglas nuevas	Border poll; consulta en Irlanda
Negociación	Deuda, moneda, frontera, defensa, ciudadanía	Estado, fiscalidad, frontera y servicios	Modelo irlandés, derechos, servicios y financiación
Ratificación	Leyes en Westminster y Holyrood; posible voto final	Legislación y posible ratificación	Legislación en Londres y Dublín
Exterior	Reconocimiento, UE, OTAN	Reconocimiento, UE y alianzas	Continuidad dentro de Irlanda y UE

PUNTO DE CONTROL

Un voto favorable abre una obligación política de negociar; no mueve por sí solo fronteras, deuda, ciudadanía o bases militares. La fecha efectiva debe llegar después de que las leyes y sistemas esenciales estén listos.

ANEXO D · MATRIZ NUCLEAR Y SUPUESTOS DE COSTO

Cifra	Fecha/precios	Incluye	Excluye o no demuestra
£3–4 mil M	2012/13; RUSI 2014	Adaptar Devonport + nuevo Coulport	Terreno/despeje pleno; no es presupuesto actual
£8–10 mil M	Evidencia 2012–13	Alternativa inglesa según testimonio	No fue adoptada oficialmente
Hasta £50 mil M	Rangos citados históricamente	Escenarios amplios	No es previsión validada ni comparable
£15,1 mil M	Anuncio 2026	Transformación de Clyde por diez años	No mide traslado
£31 + £10 mil M	Programa Dreadnought	Submarinos y contingencia	No incluye toda la empresa nuclear
£128 mil M	Equipo DNE hasta 2033	Pronóstico agregado de equipos	No es costo anual ni mudanza

Para actualizar un costo de traslado se necesitan: sitio; diseño de base y depósito; calendario; precio base; terreno y compensación; regulación; continuidad de patrulla; contingencia; cierre y descontaminación de Clyde; y tratamiento de inflación de construcción. Sin esos elementos, aplicar sólo el índice de precios al consumidor ofrece precisión ficticia.

La negociación puede valorar el acceso temporal mediante renta, inversión local, reparto de deuda o concesiones en otros capítulos. El valor no equivale al costo de obra: depende de cuánto paga Londres por evitar interrupción y cuánto paga Escocia políticamente por alojar armas durante la transición.

ANEXO E · GLOSARIO Y NOTAS METODOLÓGICAS

Término	Definición operativa en este informe
---------	--------------------------------------

Reino Unido	Estado compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte
Gran Bretaña	Isla que contiene Inglaterra, Escocia y Gales; no incluye Irlanda del Norte
rUK	Resto del Reino Unido desde la perspectiva de una nación
GERS	Estimación de ingresos y gasto público atribuibles a Escocia bajo el arreglo vigente
Border poll	Consulta prevista por el marco de 1998 sobre el estatus de Irlanda del Norte
CTA	Common Travel Area entre Reino Unido, Irlanda, Isla de Man e Islas del Canal
CASED	Continuous at Sea Deterrence: patrulla nuclear submarina continua
Estado continuador	Estado que mantiene personalidad, instituciones y obligaciones principales tras una separación
Sucesión	Asignación de derechos, tratados, activos y pasivos entre Estados

Notas sobre comparabilidad

Las fechas de los datos varían porque las oficinas publican con calendarios diferentes. Se prefirió el último dato oficial disponible a la fecha de corte. Los porcentajes se redondean y pueden no sumar cien. Las magnitudes en libras no se actualizaron salvo indicación expresa. Los datos de población proyectada son escenarios centrales, no objetivos ni pronósticos inevitables.

Las estimaciones fiscales territoriales asignan gasto central mediante convenciones. Cambiar la convención cambia el saldo, pero no elimina la necesidad de financiar servicios y transición. Los modelos de Irlanda unida se presentan juntos porque sus supuestos sobre pensiones y convergencia explican gran parte de la diferencia. Las cifras nucleares se mantienen en su base de precios original cuando corresponde.

Las encuestas citadas describen la pregunta publicada. No se mezclan muestras autoseleccionadas con sondeos representativos. Cuando se excluyen indecisos, el informe lo indica. Los resultados electorales se interpretan como mandato constitucional sólo si el manifiesto y el voto respaldan expresamente esa acción.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE VERIFICACIÓN

La bibliografía combina documentos oficiales, estadísticas, informes parlamentarios, investigación académica, centros especializados y medios identificados como fuentes periodísticas. Las fuentes normativas y estadísticas sostienen los hechos; los artículos académicos y profesionales se utilizan para interpretación; los medios se citan para reconstruir declaraciones, encuadres y coyuntura. No se utilizó Wikipedia.

- [1] House of Commons Library, The United Kingdom and independence, 08-05-2026. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10649/>
- [2] House of Commons Library, Scottish Parliament elections 2026. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10843/>
- [3] Prime Minister's Office, meeting with First Minister John Swinney, 23-07-2026. <https://www.gov.uk/government/news/pm-meeting-with-first-minister-of-scotland-john-swinney-23-july-2026>
- [4] House of Commons Library, Senedd Cymru elections 2026. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10838/>
- [5] Belfast Agreement 1998. <https://archive.niassembly.gov.uk/ia/agreement.htm>
- [6] Electoral Commission, Results and turnout at the EU referendum. <https://www.electoralcommission.org.uk/research-reports-and-data/our-reports-and-data-past-elections-and-referendums/results-and-turnout-eu-referendum>
- [7] Northern Ireland Assembly, The Windsor Framework. <https://www.niassembly.gov.uk/assembly-business/brexit-and-beyond/the-windsor-framework/>
- [8] UK Supreme Court, Scottish independence referendum judgment, 23-11-2022. <https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2022-0098>
- [9] ONS, National population projections, 2024-based. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationprojections/bulletins/nationalpopulationprojections/latest>
- [10] More in Common, 2026 Elections Deck. <https://www.moreincommon.org.uk/media/q43nandp/2026-elections-deck-4.pdf>
- [11] Scottish Government, Currency and fiscal policy. <https://www.gov.scot/publications/building-new-scotland-stronger-economy-independence/pages/8/>
- [12] Scottish Government, Creating a modern constitution. <https://www.gov.scot/publications/building-new-scotland-creating-modern-constitution-independent-scotland/pages/7/>
- [13] Scottish Government, Exports Statistics Scotland 2023. <https://www.gov.scot/publications/exports-statistics-scotland-2023/>
- [14] Scottish Government, Government Expenditure and Revenue Scotland 2025–26. <https://www.gov.scot/publications/government-expenditure-revenue-scotland-2025-26/pages/8/>
- [15] Welsh Government, Wales Economic and Fiscal Report 2024. <https://www.gov.wales/sites/default/files/publications/2024-12/wales-economic-and-fiscal-report-2024.pdf>
- [16] Welsh Government, Constitutional Future Commission, chapter 7. <https://www.gov.wales/independent-commission-on-the-constitutional-future-of-wales-final-report-chapter-7.html>
- [17] Northern Ireland Life and Times Survey 2025, referendum question. https://www.ark.ac.uk/nilt/2025/Political_Atitudes/REFUNIFY.html
- [18] NISRA, Census 2021 religion tables. <https://www.nisra.gov.uk/publications/census-2021-main-statistics-religion-tables>
- [19] NISRA, Northern Ireland Economic Trade Statistics 2024. <https://www.nisra.gov.uk/statistics/business/ni-economic-trade>
- [20] Government of Ireland, The Common Travel Area. <https://www.gov.ie/en/department-of-foreign-affairs/publications/the-common-travel-area/>
- [21] House of Commons Library, The Crown and the constitution. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8885/>
- [22] European Union, Article 49 and accession. <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/treaty-on-european-union-joining-the-eu.html>
- [23] UK Home Office, Immigration system statistics: regional and local authority data. <https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/immigration-system-statistics-regional-and-local-authority-data>
- [24] House of Commons Library, The Overseas Territories. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9706/>
- [25] House of Commons Library, The Crown Dependencies. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8611/>
- [26] Commonwealth Secretariat, Joining the Commonwealth. <https://thecommonwealth.org/about/joining>

- [27] Welsh Government, Constitutional Future Commission, final report. <https://www.gov.wales/sites/default/files/publications/2024-07/independent-commission-on-the-constitutional-future-of-wales-final-report.pdf>
- [28] Government of Ireland, Statement on Brexit preparations, 02-05-2017. <https://www.gov.ie/en/department-of-the-taoiseach/press-releases/government-statement-on-brexit-preparations/>
- [29] ONS, Long-term international migration, year ending December 2025. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/longterminternationalmigrationprovisional/latest>
- [30] UK Ministry of Defence, Defence Nuclear Enterprise 2026 Annual Update. <https://www.gov.uk/government/publications/defence-nuclear-enterprise-2026-annual-update-to-parliament/defence-nuclear-enterprise-2026-annual-update-to-parliament>
- [31] UK Ministry of Defence, Record £26 billion investment in naval bases, 14-07-2026. <https://www.gov.uk/government/news/record-26-billion-investment-to-transform-uk-naval-bases-docking-facilities-and-waterfront-infrastructure>
- [32] RUSI, Relocation, Relocation, Relocation, 2014. https://static.rusi.org/201408_op_relocation_relocation_relocation.pdf
- [33] House of Commons Scottish Affairs Committee, Terminating Trident—Days or Decades?. <https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmscotaf/676/676.pdf>
- [34] Scottish Government, Defence and Security: Independence—what you need to know. <https://www.gov.scot/publications/independence-what-you-need-to-know/pages/defence/>
- [35] House of Commons Defence Committee, written evidence on Scotland and defence. <https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmdfence/writev/483/483.pdf>
- [36] Scottish Government, Draft Independence Referendum Bill published, 28-08-2026. <https://www.gov.scot/news/draft-independence-referendum-bill-published/>
- [37] Welsh Government, Rhun ap Iorwerth elected First Minister of Wales, 12-05-2026. <https://www.gov.wales/rhun-ap-iorwerth-elected-first-minister-wales>
- [38] Northern Ireland Executive, Your Executive, consultado 19-09-2026. <https://www.northernireland.gov.uk/topics/your-executive>
- [39] Associated Press, UK nationalist leaders sign Cardiff memorandum, 14-09-2026. <https://apnews.com/article/4242b7fd6987520211562a2250f093a1>
- [40] Scottish Parliament, Motion S7M-01173 on the Cardiff memorandum. <https://www.parliament.scot/chamber-and-committees/votes-and-motions/S7M-01173>
- [41] Scottish Parliament, Official Report, 15-09-2026. <https://www.parliament.scot/chamber-and-committees/official-report/search-what-was-said-in-parliament/meeting-of-parliament-15-09-2026?iob=225698&meeting=20224>
- [42] Welsh Government and Scottish Government, Cardiff Agreement on intergovernmental collaboration, 2026. <https://www.gov.wales/leaders-of-wales-and-scotland-set-out-plans-for-collaboration-with-signing-of-cytundeb-caerdydd-cardiff-agreement>
- [43] House of Commons Library, Introduction to devolution in the United Kingdom. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8599/>
- [44] House of Commons Library, Devolution in Northern Ireland. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/CBP-8439/>
- [45] House of Commons Library, Parliamentary sovereignty. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10377/>
- [46] House of Commons Library, The Sewel Convention. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/CBP-8883/>
- [47] Welsh Government, Independent Commission on the Constitutional Future of Wales, reports. <https://www.gov.wales/reports-of-the-independent-commission-on-the-constitutional-future-of-wales>
- [48] Welsh Government, Commission final report, chapter 6: public views. <https://www.gov.wales/independent-commission-on-the-constitutional-future-of-wales-final-report-chapter-6-html>
- [49] Welsh Government, Commission final report, chapter 8: finance and capacity. <https://www.gov.wales/independent-commission-on-the-constitutional-future-of-wales-final-report-chapter-8-html>
- [50] What Scotland Thinks, Scottish independence polling series. <https://www.whatscotlandthinks.org/questions/how-would-you-vote-in-the-in-a-scottish-independence-referendum-if-held-now-ask/?pollster%5B%5D=yougov&removed=removed>
- [51] Scottish Government, GERS 2025–26, full release. <https://www.gov.scot/publications/government-expenditure-revenue-scotland-2025-26/>
- [52] Scottish Government, Consolidated Accounts 2024–25: Scottish GDP. <https://www.gov.scot/publications/scottish-government-consolidated-accounts-year-ended-31-march-2025/>
- [53] Scottish Government, Scottish Economic Insights, March 2026. <https://www.gov.scot/publications/scottish-economic-insights-march-2026/pages/3/>
- [54] Scottish Government, Labour Productivity Statistics 2024. <https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/statistics/2025/09/labour-productivity-statistics-2024/documents/publication-download/publication-download/govscot%253Adocument/Labour%252BProductivity%252B2024.pdf>
- [55] Institute for Government, Currency options for an independent Scotland. <https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/scotland-currency>
- [56] Institute for Fiscal Studies, Devolved borrowing and reserves. <https://ifs.org.uk/articles/devolved-borrowing-and-reserves>
- [57] Institute for Government, Fiscal positions of Scotland, Wales and Northern Ireland. <https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/fiscal-position-scotland-wales-northern-ireland>
- [58] Scottish Government, Exports Statistics Scotland 2023, full release. <https://www.gov.scot/publications/exports-statistics-scotland-2023/>
- [59] Welsh Government, Trade Survey for Wales 2022. <https://www.gov.wales/trade-survey-wales-tsw-2022-official-statistics-development-html>
- [60] Welsh Government, Welsh international goods trade 2024. <https://www.gov.wales/welsh-international-goods-trade-2024-html>
- [61] ONS, National population projections: mortality and assumptions, 2024-based. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationprojections/methodologies/nationalpopulationprojectionsmortalityassumption2024based>
- [62] Scotland's Census, rounded population estimates 2022. <https://www.scotlandscensus.gov.uk/2022-reports/scotlands-census-2022-rounded-population-estimates/>
- [63] Scotland's Census, Demography and migration 2022. <https://www.scotlandscensus.gov.uk/2022-reports/scotland-s-census-2022-demography-and-migration/>
- [64] Scottish Government, Migration: supporting Scotland's economy and communities, 2026. <https://www.gov.scot/publications/migration-supporting-future-scotlands-economy-communities/>
- [65] Scottish Government, Migration position: flows with the rest of the UK. <https://www.gov.scot/publications/migration-supporting-future-scotlands-economy-communities/pages/2/>
- [66] Scottish Government, Migration policy in an independent Scotland. <https://www.gov.scot/publications/independence-what-you-need-to-know/pages/migration/>
- [67] ONS, National population projections: migration assumptions, 2024-based. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationprojections/methodologies/nationalpopulationprojectionsmigrationassumption2024based>
- [68] Scotland's Census, National identity. <https://www.scotlandscensus.gov.uk/census-results/at-a-glance/national-identity/>
- [69] Welsh Government, Public attitudes towards the constitutional future of the UK, 2023. <https://www.gov.wales/sites/default/files/publications/2024-01/public-attitudes-towards-the-constitutional-future-of-the-uk.pdf>
- [70] ONS, Welsh language in Wales: Census 2021. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/language/bulletins/welshlanguagewales/census2021>
- [71] ONS, National identity, England and Wales: Census 2021. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/ethnicity/bulletins/nationalidentityenglandandwales/census2021>
- [72] Welsh Government, Mid-year population estimates 2025. <https://www.gov.wales/mid-year-estimates-population-2025-html>
- [73] NISRA, Census 2021 main statistics: religion. <https://www.nisra.gov.uk/publications/census-2021-main-statistics-religion-tables>
- [74] NISRA, National identity, Census 2021 table CT0071. <https://www.nisra.gov.uk/publications/ct0071-national-identity-8-categories>
- [75] UK Government, Windsor Framework independent monitoring report. <https://www.gov.uk/government/publications/windsor-framework-independent-monitoring-report/windsor-framework-independent-monitoring-report-html>
- [76] NISRA, Economic Overview, September 2026. <https://www.nisra.gov.uk/statistics/about-economic-and-labour-market-statistics-elms/economic-overview>
- [77] NISRA, Northern Ireland Composite Economic Index. <https://www.nisra.gov.uk/statistics/economic-output/ni-composite-economic-index>
- [78] Government of Ireland, Shared Island research programme. <https://www.gov.ie/en/department-of-the-taoiseach/publications/shared-island-research/>
- [79] ESRI, Economic overview of Ireland and Northern Ireland, 2025. <https://www.esri.ie/publications/economic-overview-of-ireland-and-northern-ireland>

- [80] Ireland Department of Finance, Research on the all-island economy. <https://www.gov.ie/en/department-of-finance/press-releases/minister-chambers-welcomes-research-on-all-island-economy/>
- [81] IIEA, Northern Ireland Subvention: Possible Unification Effects, 2024. https://www.newrymournedown.org/media/uploads/northern_ireland_subvention_possible_unification_effects_-_iiea_2024.pdf
- [82] John Doyle, Fiscal projections for a United Ireland, DCU, 2024. <https://vote.sinnfein.ie/wp-content/uploads/2024/05/Doyle-DCU-Fiscal-projections-for-a-United-Ireland-May-2024.pdf>
- [83] DCU and Ulster University, Modelled year-one cost of a united Ireland, 2025. <https://www.dcu.ie/lawandgovernment/news/2025/aug/year-one-cost-united-ireland-eu3bn-reaching-break-even-within-9>
- [84] Oireachtas Joint Committee on the Good Friday Agreement, evidence on economics, 23-05-2024. https://www.oireachtas.ie/en/debates/debate/joint_committee_on_the_implementation_of_the_good_friday_agreement/2024-05-23/
- [85] Office for Budget Responsibility, Economic and Fiscal Outlook, November 2025. <https://obr.uk/efo/economic-and-fiscal-outlook-November-2025/>
- [86] Office for Budget Responsibility, Brexit analysis. <https://obr.uk/forecasts-in-depth/the-economy-forecast/brexit-analysis/?form=MG0AV3>
- [87] House of Commons Library, Statistics on UK–EU trade, 2025. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7851/>
- [88] EUR-Lex, Treaty on European Union: joining the EU. <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/treaty-on-european-union-joining-the-eu.html>
- [89] European Commission, Economic accession criteria. https://economy-finance.ec.europa.eu/international-economic-relations/candidate-and-neighbouring-countries/enlargement/economic-accession-criteria_en
- [90] House of Commons Library, The King and the other realms. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-11058/>
- [91] House of Commons Library, The coronation oath. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-11141/>
- [92] UK Ministry of Defence, £8.4bn investment advances the nuclear deterrent, 2026. <https://www.gov.uk/government/news/major-84bn-investment-advances-uk-nuclear-deterrent-and-backs-british-industry>
- [93] House of Commons Library, The cost of the UK's strategic nuclear deterrent. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8166/>
- [94] National Audit Office, The Defence Nuclear Enterprise: a landscape review. <https://www.nao.org.uk/press-releases/the-defence-nuclear-enterprise-a-landscape-review/>
- [95] National Audit Office, The Equipment Plan 2023–2033. <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2023/12/The-Equipment-Plan-20232033.pdf>
- [96] NATO, How countries join NATO. <https://www.nato.int/en/what-we-do/introduction-to-nato>
- [97] ONS, Long-term international migration, year ending December 2025. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/longterminternationalmigrationprovisional/latest>
- [98] UK Government, Trade and Investment Core Statistics Book. <https://www.gov.uk/government/statistics/trade-and-investment-core-statistics-book/trade-and-investment-core-statistics-book>
- [99] El País, Los nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se unen para impulsar su independencia, 14-09-2026. <https://elpais.com/internacional/2026-09-14/los-nacionalistas-de-escocia-gales-e-irlanda-del-norte-se-unen-para-impulsar-su-independencia-del-reino-unido.html>
- [100] Real Instituto Elcano, Escocia y Londres: ¿crisis constitucional por el Brexit?, 22-05-2018. <https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/escocia-londres-crisis-constitucional-por-brexit/>
- [101] Real Instituto Elcano, Independentismo e integración europea: la imposible adhesión automática, 22-11-2012. <https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/independentismo-e-integracion-europea-la-imposible-adhesion-automatica-a-la-ue-de-un-territorio-secesionado/>
- [102] CIDOB, Escocia: el país que desmiente que república e independencia sean sinónimos, 2021. <https://www.cidob.org/en/cidob-media/escocia-el-pais-que-desmienteix-que-republica-i-independencia-son-sinonims>
- [103] Revista de Derecho Político (UNED), Secesión y constitucionalismo. <https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/download/26149/20723/57335>
- [104] NatCen, British Social Attitudes 41: National Identity, 03-09-2024. <https://natcen.ac.uk/publications/british-social-attitudes-41-national-identity>
- [105] Marina Dekavalla, The media framing of the referendum, Cambridge Core/Manchester University Press, 2026. <https://www.cambridge.org/core/books/abs/framing-referendum-campaigns-in-the-news/media-framing-of-the-referendum/2FF3D82E0B7DB58810E1C8CC1C387F76>
- [106] NatCen, Scottish Social Attitudes: 25 years of devolution in Scotland, 09-10-2025. <https://natcen.ac.uk/publications/scottish-social-attitudes-25-years-devolution-scotland>
- [107] British Journal of Political Science, Tones from a Narrowing Race: the 2014 Scottish referendum campaign. <https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-science/article/tones-from-a-narrowing-race-polling-and-online-political-communication-during-the-2014-scottish-referendum-campaign/49CEE09374F4729B4C0B7048FBA4521C>
- [108] Supreme Court of Canada, Reference re Secession of Quebec, 1998. <https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do>
- [109] Venice Commission, Code of Good Practice on Referendums. <https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282007%29008-e>
- [110] Robert A. Young, How Do Peaceful Secessions Happen?, Canadian Journal of Political Science. <https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-canadienne-de-science-politique/article/abs/how-do-peaceful-secessions-happen/999D59EA5ED0801379472A22197F7D4E>